

DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

ACTO **VIERNES 1º DE MAYO A LAS 17**

HABLARÁN



Romina Del Plá

Celeste Fierro

Gringo Giordano

Nicolás Del Caño

CONECTATE
POR NUESTRAS REDES



IZQUIERDASOCIALISTAARG
IZQSOCIALISTA
ISUITCI

**FRENTE DE
IZQUIERDA**
Y DE LOS TRABAJADORES

UNIDAD

**A PARTIR
DE LAS
16.15**

Saludos de dirigentes internacionales de la
Unidad Internacional
de las y los Trabajadores UIT-CI

Estamos ante un 1° de Mayo inédito. Por la pandemia, después de varias décadas no habrá actos multitudinarios en todo el planeta. En nuestro país, ya hace varios años que como Frente de Izquierda levantamos nuestras banderas rojas en la Plaza de Mayo. Este año no podrá ser. Haremos un acto virtual. Pero el objetivo es el mismo. Diremos presente dando nuestro apoyo a todas las luchas obreras y populares, de las mujeres y la juventud en cada lugar del planeta. Y más que nunca vamos a reafirmar la importancia de conmemorar el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores como una jornada de lucha contra el capitalismo imperialista, por el gobierno de los trabajadores y el socialismo. Contra todo tipo de gobiernos patronales, quienes se han encargado a lo largo del mundo de dismantelar los sistemas públicos de salud llevando a que millones no puedan tener hoy esa herramienta clave para combatir el coronavirus. Los mismos gobiernos que se preparan para salvar con millones a bancos, multinacionales y grandes empresarios y permitirles que descarguen la mayor crisis de esta pandemia sobre el pueblo trabajador con despidos, rebajas salariales y más ajustes.

En nuestro país la clase trabajadora y los sectores populares vivimos una situación complicada. Somos los que de verdad defendemos la cuarentena contra las patronales que presionan por reabrir todo para mantener sus ganancias, no importando las consecuencias sanitarias. Contra los despidos, las suspensiones, las bajas salariales y los aumentos de precios.

Mientras todo esto sucede, ¿qué hace el gobierno peronista de Alberto Fernández? Nos hacemos esta pregunta sabiendo que millones de trabajadores siguen teniendo confianza en el presidente pensando que está haciendo “todo lo posible” para enfrentar la pandemia y sus consecuencias sociales. Pero lamentablemente no es así. Porque dice una cosa y hace otra, enarbolando un verdadero doble discurso.

El gobierno habla de “proteger a los trabajadores” y a los más vulnerables. Pero avaló un pacto entre la Unión Industrial, el resto de las patronales y la burocracia sindical para rebajar 25% el salario a todos los trabajadores que actualmente no presen servicios a pesar de que el Estado (es decir el bolsillo del pueblo trabajador), por decisión del gobierno, está pagando el 50% de los salarios a grandes empresarios y multinacionales. O sea, el gobierno paga la mitad de los salarios y a la vez

permite a las patronales una quita de 25% vía el Ministerio de Trabajo. Repudiamos este hecho que se hace aprovechándose de la pandemia. Usan el coronavirus y la mayor crisis para aplicar un ajuste sobre millones de trabajadores. Ya antes había ocurrido con los jubilados, quitándoles la movilidad jubilatoria con un recorte de 100.000 millones de pesos. Se está llevando a cabo esta política que ya venían promoviendo desde que asumió el Frente de Todos, de que supuestamente un consejo económico y social entre empresarios, gobierno y dirigentes sindicales iba a “controlar la inflación” o “aumentar progresivamente los salarios”. Con estas frases, que así dichas caen bien, se está llevando adelante esta rebaja salarial que hunde en la miseria a millones.

cuarentena llevan adelante los trabajadores y los pueblos para enfrentar la pandemia y sus consecuencias sociales en la Argentina y en el mundo. Exigiendo que haya una cuarentena sin rebaja salarial, suspensiones y despidos; donde haya plata para salud, comida y contra el agravamiento de la desigualdad social. Por eso impulsamos un fondo de emergencia financiado sobre la base de un impuesto a los ricos y a las grandes empresas y al no pago de la deuda externa, como lo hemos plasmado en el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad. Para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

Y en este día internacional de lucha de la clase obrera mundial tenemos que plantear la

necesidad de dar una pelea más estratégica: avanzar hacia una nueva dirección sindical y política para la clase trabajadora. En nuestro país eso quiere decir una tarea concreta. En lo sindical, batallar contra la burocracia traidora hasta barrerla y reemplazarla por una nueva dirección de lucha y democrática, como está promoviendo el sindicalismo combativo. Y en lo político, superar al peronismo, que hace décadas gobierna para los ricos, los empresarios y los banqueros y ahora lo vuelve



El gobierno, mientras subsidia a las patronales, regatea la ayuda social: se acaba de informar que los absolutamente insuficientes 10.000 pesos para aquellos que se quedaron sin ingresos no se cobrarán el mes próximo, ya que fue “por única vez”. Sumémosle a esto la falta de comida, o de que en el último mensaje grabado en Olivos el presidente no dio respuesta a los reclamos de los profesionales y trabajadores de la salud por los enormes faltantes de elementos para la prevención en un sector donde se están dando numerosos contagios. Agreguemos que, si bien los diputados oficialistas han anunciado un necesario impuesto a la riqueza, todavía no han hecho público ese proyecto ni deciden cuándo lo van a tratar o implementar. Una medida indispensable para tener fondos suficientes para combatir la crisis del coronavirus y asistir a los más vulnerables. Y el gobierno sigue adelante con la renegociación de la deuda externa para reconocerla y pagarla. Al mismo tiempo no dispone para atender la emergencia de los u\$s4.500 millones que dice que se va a ahorrar hasta fin de año por la postergación de los pagos.

Este 1° de Mayo le daremos el apoyo a todas las luchas obreras y populares que en medio de la

a hacer con un doble discurso desde el Frente de Todos. El peronismo gobernante habla contra el “neoliberalismo” o contra la derecha liberal de los Macri o los Piñera, promocionando que con gobiernos supuestamente “nacionales y populares” o progresistas se pueden combatir los males sociales. Pero la realidad demuestra que, con distintos discursos, en todos estos años se siguió pagando la deuda externa, las multinacionales y los bancos hicieron fortunas y se aplicaron de distintas formas ajustes contra el pueblo trabajador. Por eso decimos que el peronismo, y cualquier otra fuerza política patronal, no les sirven a los trabajadores. Atento a ello es que postulamos al Frente de Izquierda Unidad como la única salida que ofrece un programa de fondo para atacar y resolver las más urgentes necesidades populares, un gobierno de los trabajadores. Para dar esta pelea te invitamos a que te sumes a construir y fortalecer a Izquierda Socialista para hacer más grande el Frente de Izquierda Unidad. Esto es lo que vamos a compartir, explicar y debatir este 1° de Mayo. Te invitamos a que sigas el acto por nuestras redes sociales y a que lo difundas para que se sumen tus compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, amigos y familiares.

Conectate por nuestras redes

Participá del acto del FIT Unidad y ayudanos a difundirlo

Este viernes, en una nueva conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, desde el FIT Unidad vamos a realizar un acto virtual, internacionalista y de lucha. Porque aunque estemos en cuarentena los reclamos de los trabajadores están más vigentes que nunca. Para que el peso de la crisis, que se profundiza por la pandemia del coronavirus,

la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

Como es nuestra tradición, comenzaremos la jornada (a partir de las 16.15) con saludos internacionales de dirigentes de los partidos hermanos de la UIT-CI. A las 17 continuaremos con el acto del Frente de Izquierda.

**TE ESPERAMOS
A TRAVÉS
DE NUESTRAS
REDES**

[f facebook.com/izquierdaSocialistaArg/](https://facebook.com/izquierdaSocialistaArg/)
[@ instagram.com/izqsocialista/](https://instagram.com/izqsocialista/)
[y youtube.com/user/ISUITCI](https://youtube.com/user/ISUITCI)

DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

ACTO VIERNES 1^{RO}
DE MAYO
17HS

HABLARÁN



Romina Del Pía Celeste Fierro Gringo Giordano Nicolás Del Caño

CONECTATE

POR NUESTRAS REDES

IZQUIERDASOCIALISTAARG

IZQSOCIALISTA

ISUITCI

FRENTE DE
IZQUIERDA

DE LOS TRABAJADORES

UNIDAD

A PARTIR
DE LAS
16.15HS

Saludos de dirigentes Internacionales de la
Unidad Internacional
de las y los Trabajadores (UIT-CI)

Declaración del FIT-U por el Día Internacional de los Trabajadores

El próximo Primero de Mayo, día internacional de la clase obrera, encuentra al mundo inmerso en una crisis de magnitudes históricas.

La pandemia que azota a la humanidad en pleno siglo XXI ha puesto de manifiesto la incompatibilidad del sistema capitalista y sus intereses en base al lucro y a la ganancia privada con la preservación de la salud de los pueblos de todo el mundo. La política de vaciamiento de los sistemas sanitarios públicos llevada a cabo por todos los gobiernos ha sido una constante, no sólo en los países semicoloniales sino también en las mecas del capitalismo mundial. Este proceso se ha intensificado sensiblemente luego de la crisis mundial capitalista de 2007/08, cuando los gobiernos volcaron todos sus recursos al rescate de los bancos, multinacionales y capitales en quiebra. Como consecuencia de eso se han magnificado los estragos de la propagación del coronavirus a escala planetaria.

Los muertos por el virus se acercan a las 200.000 personas. La principal potencia imperialista del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, ha pasado a ser el epicentro de la crisis sanitaria. Otras potencias como Italia, Inglaterra y Francia también se anotan dentro del pelotón de los países más afectados por la propagación del virus sin poder controlar la multiplicación de las víctimas fatales.

En un mundo atravesado por “guerras” comerciales y monetarias, el desembarco de la pandemia redundó en un salto cualitativo y en una aceleración de la crisis capitalista mundial, crisis que ya se venía gestando desde tiempo atrás. Todas las medidas de rescate y estímulos a sectores



burgueses, que los gobiernos imperialistas y capitalistas practicaron desde 2008 hasta los primeros meses de 2020 y que sólo apuntaron a salvar a los bancos y a una minoría de grandes empresarios, ya se habían revelado insuficientes para evitar el ingreso de la economía mundial a una recesión. La pandemia del Covid-19 puso fin a los devaneos de los escribas de la burguesía, empujando de un solo saque a la economía mundial no ya a una recesión sino directamente a una depresión. Los ‘inversionistas’ huyeron hacia los refugios de valor, se hundieron las acciones de las principales empresas del mundo, se rompieron las cadenas de pago y se desataron procesos de quiebras. Como consecuencia de

todo esta crisis se están recrudeciendo hasta niveles insoportables todos los antagonismos sociales precedentes, y donde lo único que crece son los despidos, la pobreza y la miseria de millones de trabajadores y demás sectores populares. En Estados Unidos y en Europa los despidos de trabajadores se cuentan de a millones. Y el mismo fenómeno de destrucción de empleo masivo se extiende por todo el mundo, incluido nuestro país. Aunque también hay muestras de que los trabajadores y los pueblos del mundo se preparan para enfrentar los ajustes capitalistas. Por iniciativa de Donald Trump, el Congreso norteamericano aprobó destinar recursos billonarios para el rescate de grupos capitalistas en crisis, lo que contrasta con los escasos recursos destinados a reforzar el sistema sanitario. Asimismo, el gobierno norteamericano se ha valido de la pandemia y de la crisis capitalista para impulsar un bloque económico reaccionario y criminal contra los pueblos de Cuba y Venezuela, y para redoblar sus amenazas militares contra Irán. Por su parte, la Unión Europea impulsa medidas de rescate similares a las del gobierno norteamericano. Los gobiernos conservadores y derechistas de Europa, como el de Boris Johnson en Inglaterra y el de Emanuel Macron en Francia, así como los gobiernos centroizquierdistas o ‘progresistas’, como el de Giuseppe Conte en Italia y el de Pedro Sánchez en España, han revelado su carácter criminal, al ofrecer resistencia al aislamiento social en función de preservar la “actividad económica” de sus respectivos países. Del mismo modo, en América Latina, la pandemia

borró de un plumazo las diferencias entre el ultra derechista Jair Bolsonaro y el 'nacional y popular' López Obrador. Ambos, subestimando el impacto sanitario de la pandemia, empujan a las masas de sus respectivos países a ser víctimas del contagio masivo, con el objetivo de preservar la rentabilidad empresarial.

En nuestro país, las patronales presionan por un levantamiento total de la cuarentena en busca de una reactivación de la actividad económica para preservar sus beneficios, lo que objetivamente atenta contra la salud del pueblo trabajador. En distintos sectores y en forma progresiva, el gobierno de Fernández deja correr a los lobbies empresariales, al mismo tiempo que rechaza destinar los recursos necesarios para apuntalar el sistema sanitario e impulsar tests masivos, y rechaza reorientar una parte de la industria a la producción de los insumos e instrumentales fundamentales para hacerle frente a la pandemia. Por el contrario, el gobierno de Fernández reafirma la política que postuló desde el día que asumió: subordinar todo a la reestructuración de la deuda con los acreedores privados y los organismos de créditos internacionales, sin cuestionar el carácter "odioso" y fraudulento de esa deuda. Ese plan de reestructuración de la deuda fue votada en el Congreso con la sola oposición de los diputados del Frente de Izquierda. El gobierno no solo ha sostenido un pago riguroso de la mayor parte de los vencimientos de deuda que han tenido lugar en el curso de este año, destinando para ello los 4.500 millones de dólares previstos en la propia ley de emergencia (incluso en el marco de la llegada de la pandemia), sino que le ha presentado a los usureros internacionales, de común acuerdo con el FMI y la 'oposición' patronal, un plan de reestructuración que solo establece una quita del 5% del capital adeudado y que les reconoce una tasa de interés enormemente superior a la que rige en el mercado internacional. Mientras, reconoce el conjunto de la deuda, que supera los 400.000 millones de dólares, incluida la que Macri que pactó con el FMI, dinero que fue todo a la bicicleta financiera.

Mientras el gobierno "nacional y popular" extrema los esfuerzos del país para cumplir con los preceptos del FMI y los especuladores del capital financiero internacional, el desembarco de la pandemia en la Argentina encontró al sistema sanitario público con un presupuesto congelado, heredado del gobierno de Mauricio Macri y de todos los gobiernos peronistas anteriores. Las consecuencias de este desfinanciamiento se revelaron rápidamente: Argentina tiene hoy la proporción de personal de salud infectado por Covid-19 más alta del mundo en relación al conjunto de los infectados. Los capitalistas, por su parte, descargan su crisis sobre las espaldas de los trabajadores, con decenas de miles de despidos y suspensiones y violentas reducciones salariales. Las burocracias sindicales, lejos de defender las conquistas de los trabajadores, se anotan como voceros y representantes de sus respectivas patronales, rubricando los ataques de las patronales contra los derechos laborales. Y el gobierno a la vez que permite el alza de despidos, suspensiones y rebajas salariales, premia a las empresas con subsidios estatales para que afronten parte del pago de salarios, en lugar de que utilicen sus fabulosas ganancias obtenidas en años anteriores.

En la mayor parte de los países del mundo, los gobiernos capitalistas escudados en las crisis sanitarias refuerzan y le otorgan un renovado protagonismo a los aparatos de seguridad, previendo nuevos alzamientos de las masas ante la carestía generalizada y la catástrofe sanitaria. A esa tendencia general, en nuestro país el gobierno le agregó el ciberpatrullaje, que no es otra cosa que un represivo control social preventivo desde las redes sociales, frente a posibles protestas sociales y un alza del descontento.

La pandemia ha puesto en evidencia el carácter criminal de la política capitalista de los distintos gobiernos del mundo.

Pero del otro lado, los explotados empezamos a hacer oír nuestra voz. Los trabajadores de la salud, en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, se encuentran a su vez liderando la lucha contra los vaciamientos sanitarios de los gobiernos capitalistas protagonizando todo tipo de denuncias, asambleas, abrazos a hospitales y otras acciones posibles en el marco de la pandemia. En EEUU, México, Honduras, Colombia, Perú, Brasil y Argentina; en el Reino Unido, Italia, Grecia y Francia; en Pakistán, Nigeria, Malawi, Zimbawue y Sudáfrica; los trabajadores de la salud se ponen de pie y marcan un camino para toda la clase obrera internacional. Camino del cual también comienzan a ser parte las y los jóvenes precarizados que vienen denunciando

activamente los recortes salariales, como en las cadenas de comidas rápidas o en el paro internacional de repartidores, entre otros sectores.

A su vez, los trabajadores y los pueblos del mundo no ingresan a la presente crisis como una "hoja en blanco". El 2019 ha sido un año signado por la irrupción del proletariado en importantes metrópolis y por la emergencia de grandes rebeliones populares en distintos países Latinoamericanos, de Medio Oriente, del norte de África y europeos, como Francia. La pandemia ha impuesto un relativo cuadro de contención de estas enormes luchas y alzamientos de las masas, pero de ninguna manera esos procesos se han cerrado, pues todas las contradicciones sociales que motivaron esos estallidos lejos de haberse disipado se han agudizado. Y así como ya han comenzado a manifestarse algunas primeras y diversas expresiones de protesta frente a las malas respuestas gubernamentales a la pandemia, los procesos de lucha y reclamos tenderán a crecer retomando la experiencia de 2019.

Rechazamos la tesis de distintos sectores progresistas que plantea que el problema no es el capitalismo sino tan solo el neoliberalismo, dando la idea que podría haber un "capitalismo más humano". La crisis actual evidencia el carácter irracional, decadente y destructor del ambiente y la vida, del sistema capitalista en todas sus variantes, con políticas llevadas a cabo tanto por los gobiernos denominados liberales de derecha como los llamados "nacionales y populares", "progres de centroizquierda" o de un falso socialismo.

Por esa razón la defensa de la independencia política de los trabajadores en las batallas actuales y venideras, en oposición a la política funesta de la colaboración de clases, será fundamental para llevar las luchas obreras y populares a la victoria y para zanjar el camino que lleve, finalmente, a los trabajadores al poder.

Para reforzar esta perspectiva, desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad levantamos este 1° de Mayo, día de lucha, de reivindicación de la unidad internacional de los trabajadores y de conmemoración de sus mártires, un programa anticapitalista y socialista de respuesta integral frente a la pandemia y la crisis capitalista:

- Que la crisis la paguen los capitalistas, los bancos, multinacionales y grandes empresarios, no el pueblo trabajador. Plata para los hospitales y los profesionales y trabajadores de la salud. Tests masivos para poder determinar la real propagación de la pandemia. Por una cuarentena sin despidos, suspensiones y rebajas salariales. Por un inmediato Fondo de Emergencia para destinar las partidas necesarias a combatir la mayor crisis del coronavirus en base a un impuesto especial y progresivo a todas las grandes riquezas, bancos, patrimonios y dueños de la tierra y el no pago de toda la deuda externa.

- Abajo los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales. Pago de los jornales íntegros por las patronales. Reparto de las horas de trabajo sin reducir salarios. Apertura de sus libros contables. Licencias pagas al 100% de todo sector productivo no esencial para enfrentar la pandemia. Obligatoriedad de empresas a reconvertirse para producir insumos necesarios frente a la pandemia. Comisiones de las y los trabajadores de control de las normas de la salubridad. Subsidio otorgado por simple inscripción a todo trabajador desocupado o precarizado, igual a la duplicación de los salarios mínimos vigentes. Aumento inmediato de salarios, jubilaciones y planes sociales.

- Triplicación inmediata de los presupuestos de salud para dotar de respiradores, medicinas, tomar más médicos y enfermeras, habilitar salas y camas y reactivos que puedan diagnosticar el corona virus, entre otras tantas demandas que el personal está levantando. Constitución de comités de crisis o emergencia elegidos e integrados por trabajadores hospitalarios, con derecho a veto, para garantizar la bioseguridad del personal hospitalario y diseñar la política de intervención. Distribución gratuita de alcohol en gel, desinfectantes, barbijos y toda medicina necesaria para combatir el virus pandémico.

- Unificación y centralización del sistema de salud a nivel nacional, que reúna la totalidad de los recursos del sistema público, privado, de obras sociales y de la Universidad, bajo control de los trabajadores y profesionales. Implementación de comités de emergencia (o crisis) central y locales, con participación de lxs trabajadorxs.

- Control popular de precios de los alimentos, productos de primera necesidad y medicamentos. Apertura de los libros

de contabilidad de las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras de alimentos y medicamentos. Abajo la especulación capitalista con la comida y los remedios. Castigo a los monopolios formadores de precios. Incautación, clausura y detención de los responsables.

- No a los desalojos de viviendas. Congelamiento de alquileres y no pago de los mismos mientras dure la pandemia. Compensación a los pequeños propietarios de hasta dos viviendas. Censo de viviendas ociosas y ocupación de emergencia de las mismas a ciudadanos sin vivienda o familias hacinadas (villas, etc.) que es donde más rápidamente se puede extender el contagio de la pandemia, comenzando por las personas integrantes de los grupos más vulnerables (adultos mayores, enfermedades preexistentes, etc.).

- Presupuesto de emergencia en violencia de género, para atender en forma urgente y con lugares acordes para la asistencia y resguardo de las víctimas, frente a los aumentos de casos de violencia y el crecimiento de femicidios en el marco de la pandemia.

- No al uso del coronavirus para medidas de militarización o coartar el derecho a la protesta. Defensa irrestricta de las libertades democráticas. Libertad a todos los presos políticos y a los detenidos durante el transcurso de la pandemia. Derogación de decretos y leyes que viabilizan la represión. Derogación de los toques de queda. No al ciberpatrullaje. Plenos derechos a la actividad sindical y reivindicativa y a manifestarse políticamente. Apertura obligatoria de los medios de prensa a todas las expresiones políticas para debatir las políticas con que afrontar las pandemias. No al gobierno por decreto y el cierre del Congreso: que sesione y se pongan todos los proyectos del FIT-U a la discusión pública.

- Abajo las reformas laborales y previsionales reaccionarias y antiobreras. Nacionalización de todos los regímenes de jubilación privada, bajo control de los trabajadores activos y jubilados. Fuera la burocracia sindical entregadora de los derechos laborales.

- Desconocimiento soberano y no al pago de las deudas externas. Ninguna renegociación para pagar como está haciendo el gobierno del Frente de Todos en Argentina. Plata para salud, los hospitales y el pueblo trabajador, no para los usureros de la deuda. Ruptura inmediata de los pactos económicos y políticos que nos atan al imperialismo. Fuera el FMI de Argentina y de América Latina.

- Nacionalización sin pago de indemnización y bajo control obrero de los sistemas bancarios y los mercados de cambios para impedir la fuga de capitales y centralizar los ahorros nacionales, para impulsar planes de desarrollo al servicio del pueblo trabajador. Nacionalización sin indemnización y bajo control obrero de los hidrocarburos, la minería y de todos los recursos estratégicos, así como de las empresas de luz y gas. Nuestras vidas valen más que sus ganancias.

- Convocamos a la más amplia unidad de acción de las organizaciones obreras, populares, juveniles, del movimiento de mujeres y en defensa del ambiente para coordinar acciones nacionales y a nivel mundial para imponer medidas de fondo en la perspectiva de luchar por terminar con este sistema capitalista-imperialista e imponer gobiernos de la clase trabajadora. Por la Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina. Por el socialismo internacional.

El próximo viernes Primero de Mayo realizaremos un Acto que será transmitido por todas las redes sociales a partir de las 17 hs. Hablarán Romina del Plá, Cele Fierro, Juan Carlos Giordano y Nicolás del Caño



Geriátricos: una tragedia humanitaria

Escribe **Reynaldo Saccone**
ex presidente de la Cicop

Los recientes contagios y fallecimientos ocurridos en geriátricos de todo el país llevaron al primer plano a un sector de la sanidad en gran crecimiento que habitualmente pasa desapercibido: las residencias geriátricas. “Tenemos 150.000 camas y unas 3.800 residencias geriátricas en todo el país, de las cuales solo unas 2.000 tienen papeles en regla. Las personas mayores residentes son las más vulnerables y, además, muchos médicos o empleados trabajan en varios lugares y pueden llevar y traer el virus”, advirtió la semana pasada Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad en la Defensoría del Pueblo porteña. “El geriátrico que está habilitado es una bomba de tiempo a la vista, el que no lo está es una mina subterránea; en ambos casos pueden explotar”.

La muerte de adultos mayores residentes en geriátricos es un problema internacional. La experiencia reconocida en China permitió establecer que la mortalidad por coronavirus aumenta con los años de edad. De los 50 años en adelante se duplica cada diez años de edad. Cifras correspondientes a la ciudad de Nueva York mostraban hace dos semanas que el 72% de las muertes por esta virosis corresponden a mayores de 65 años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó el jueves pasado que más de la mitad de las 110.000 muertes por Covid-19 registradas en Europa eran de personas que vivían en residencias para mayores. Una “tragedia humana inimaginable”, aseguró un funcionario sobre lo que está pasando.

Un negocio de miles de millones

Karl Kluge, responsable para Europa de la entidad, insistió en que “el personal de los centros para mayores debe tener mejor acceso a equipamiento de protección y una apropiada remuneración por sus largos horarios de trabajo”, que les permita vivir



dignamente sin acudir al multiempleo, agregamos nosotros. Hace varias semanas, un protocolo elaborado por la Organización Mundial de la Salud estipulaba, además de lo mencionado, tests para residentes y para trabajadores de estos institutos.

Ninguna de estas disposiciones se cumple en Europa ni en los Estados Unidos, menos aún en la Argentina. Los geriátricos se han convertido en un negocio que mueve miles de millones en todo el mundo. La gran mayoría, 70% o más, según el país, son empresas privadas. España, en su franja soleada mediterránea, se ha convertido en un foco de atracción para fondos de inversión internacionales que instalan geriátricos para recibir no solo residentes locales sino también de otros países europeos.

En nuestro país las últimas cifras accesibles indican que más del 80% de las camas de residencias geriátricas son privadas. En la ciudad de Buenos Aires representan el 96%, mientras que en muchas provincias los geriátricos privados son los únicos. Aunque sigue habiendo una gran cantidad de pequeños propietarios se está produciendo una importante concentración de capitales en este ramo del negocio de la salud, incluso con la radicación de capitales extranjeros europeos y norteamericanos.

Mala atención y bajos salarios para la ganancia empresarial

Para obtener ganancias las empresas pagan bajos salarios y precarizan al personal de todas las profesiones. A los internados les brindan prestaciones deficientes, hacinamiento y descuido. La pandemia hizo visible y puso al rojo vivo todos estos males sostenidos por la voracidad empresarial. El mejor ejemplo es el geriátrico de Belgrano, en Capital, donde cada residente pagaba 180.000 pesos mensuales, lo que hacía presumir un servicio de excelencia. Sin embargo, catorce adultos mayores y cuatro trabajadores resultaron contagiados por el coronavirus.

También la pandemia pone al descubierto que los gobiernos de las distintas jurisdicciones no cumplen con los controles sobre estos establecimientos. Tardíamente, el gobierno de Larreta denunció penalmente al geriátrico de Belgrano. ¿Pero por qué se llegó a esta situación? ¿Por qué no hubo controles previos? Esa es responsabilidad absoluta del gobierno de Larreta. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires con el geriátrico de Moreno, o en Córdoba con el de Saldán, donde le daban al personal un rollo por día para secarse las manos.

No hay nada que inventar en cuanto a la seguridad sanitaria. Se trata de cumplir estrictamente los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Medidas higiénicas para los residentes, elementos de protección personal para trabajadores y residentes, testeo al personal y residentes para determinar la presencia del virus, comité de crisis en cada establecimiento con participación de los trabajadores. Pero esta mezcla de explotación e irresponsabilidad patronal, por un lado, y, por el otro, de corrupción y complicidad de los gobiernos, debe cortarse. Es necesario estatizar los geriátricos, bajo control de los trabajadores, para poder brindar la atención equitativa y de calidad que nuestra población mayor merece.

En defensa de la salud pública y de sus trabajadores

Escribe **Mónica Méndez**
Secretaria de Organización de la Cicop

Desde el comienzo de los contagios, aún antes de instaurarse la cuarentena, hay una lucha de los trabajadores de salud que se desarrolla en gran parte del país por su protección frente a la pandemia. Las contundentes cifras evidencian ahora que el personal de salud se ha convertido en el principal grupo de riesgo de contagio, a la par de los residentes de los geriátricos. La infección por coronavirus se yergue como una amenaza a la salud e incluso a la vida de estos trabajadores. Esta amenaza se suma a los bajos salarios que obligan al pluriempleo con dilatadas jornadas de trabajo y, ahora, a una prolongada exposición diaria al contagio. La reacción de los trabajadores del Hospital Belgrano de San Martín puso en evidencia ante la opinión pública lo acertado de los reclamos de equipamiento de protección para el personal que se venían haciendo desde un mes atrás. A partir de ese día quedó instalada la necesidad de proteger a los trabajadores.

La lucha se extiende a todo el país y el reclamo por los insumos se combina con la lucha salarial

En el día de ayer, en varios lugares del país se informó que no se pagará el bono anunciado por el Ministerio de Salud de Nación a quienes trabajan en el primer nivel de atención. La medida, que había sido anunciada hace ya bastante tiempo, implicaba una asignación de 20.000 pesos en cuatro cuotas a ser abonadas en los meses de abril, mayo, junio y julio 2020. En Tucumán, por ejemplo, la ministra de Salud intenta convertir esa suma en un presentismo y solamente a quienes estén a cargo de la atención directa a pacientes con Covid. En Santa Fe, también se quiere dejar afuera a quienes trabajan en la atención primaria de la salud. Esa suma debe ser parte del incremento salarial -y no por cuatro meses solamente, sino permanente- y además ser asignada a la totalidad del equipo de salud, en todos sus escalones de atención, dado que éste funciona como un todo frente a las necesidades de salud de la población.

En Córdoba, el gobierno quiso aprovechar la situación de emergencia para cumplir la vieja aspiración de cerrar el hospital de Santa María de Punilla. Ante las versiones periodísticas sobre el posible traslado de pacientes y desmantelamiento de servicios del establecimiento, una comisión integrada por

representantes de los gremios, reunida con la Dirección, logró que ésta asegure a los trabajadores reunidos que no habría traslado. También la Dirección se comprometió públicamente a hacerlos testeos que se venían reclamando.

Capital Federal: un avance en la coordinación de los trabajadores de salud

En la ciudad de Buenos Aires el personal de los distintos hospitales venía reclamando por su seguridad. En varios de ellos se elevaron peticiones a las direcciones, como en el Hospital Álvarez; se presentaron recursos de amparo, como en el Tornú y se realizaron “aplausazos” en las puertas, como sucedió en el Ramos Mejía, Udaondo, Rivadavia y otros. Todas estas acciones fueron convocadas por distintos sectores: profesionales residentes, la Interhospitalaria, gremiales de profesionales y autoconvocados. Finalmente, la convocatoria de ATE para realizar una acción el martes 28 a las 11 sirvió para hacer confluir todas estas iniciativas dispersas en una manifestación unitaria.

La lucha actual tiene como reivindicación inmediata el reclamo unitario por provisión de equipamiento para protección personal, testeos a todo el personal sanitario y comité de crisis en todos los hospitales. A eso se le suman los planteos salariales y la irrenunciable exigencia del reconocimiento profesional de la enfermería. Una nueva amenaza despunta en el horizonte para los trabajadores. El jefe de gobierno Rodríguez Larreta no solo facilita al socio de su hermano el hacer pingües negocios con los dineros públicos y al conocido Nicky Caputo a venderle a la Ciudad de Buenos Aires kits para testear coronavirus, también quiere bajar los sueldos de los empleados de la Ciudad y pagarlos en cuotas. Es necesario rechazar de plano este intento. Los trabajadores de salud del distrito deben continuar avanzando en nuevas medidas de lucha y su coordinación.

Las asambleas de base de la Cicop aceptaron en disconformidad la oferta de Kicillof

Más del 82% de las seccionales de Cicop votaron por la aceptación de la propuesta mientras que las restantes se pronunciaron por su rechazo. En medio de la pandemia, la discusión paritaria



fue difícil. El monto del aumento, entre 21 y 25% de bolsillo, inferior a lo reclamado inicialmente, fue aceptado en disconformidad por el 82% de las seccionales. El bono de 5.000 pesos del gobierno nacional fue extendido a todo el personal de la Ley 10.471 e incluido como parte del sueldo en forma permanente. Se quedó en el compromiso de reapertura de la discusión en junio. Finalmente, el ministro aceptó la formación de una comisión de crisis con participación de los trabajadores a nivel general y en cada uno de los establecimientos.

Durante la semana que pasó se pusieron en marcha en gran parte de los hospitales de la provincia los comités de crisis. Están integradas por los distintos gremios: Cicop, ATE y el Sindicato de Salud Pública (Fatsa). Tratan toda la problemática que se presenta en el funcionamiento del hospital en pandemia: normas de bioseguridad, desplazamiento de personal, distribución de turnos y reclamos como licencias para mayores de 60 años y personal con patología de riesgo para Covid.

Se ha iniciado una movilización de los trabajadores de salud en todo el país en defensa de su vida, salario y condiciones de trabajo. Es desigual, de acuerdo a las características y tradición de cada provincia y gremio; también tiene distinto ritmo. Pero la movilización ha comenzado. Para que alcance sus fines será necesario la creación de un fondo creado con el impuesto a los ricos y el no pago de la deuda externa.

Para garantizar la salud como derecho para todos y la seguridad de los trabajadores del sector habrá que avanzar hacia la estatización del sistema de salud, de las clínicas privadas, de los geriátricos de la industria farmacéutica y de insumos bajo control de los trabajadores y usuarios.

¿Hay que hacer la cuarentena?

Escribe **Luis Covas**



El tema “cuarentena sí, o cuarentena no” se está discutiendo desde el primer día que se aplicó en la Argentina y en el mundo. Hay muchas trabajadoras, trabajadores, amas de casa o jóvenes que la cuestionan o tienen dudas de seguir manteniéndola por diversas razones: cansancio, hastío, o por la necesidad de salir a hacer una changa o conseguir unos pesos para subsistir. Más viendo que, en el caso de la Argentina, aún no hay un contagio masivo o muertes como en Italia, España o los Estados Unidos.

Suma a la confusión que algunos sectores de la izquierda la cuestionan argumentando que es una medida de tipo “medieval” y que coarta libertades individuales y de la clase obrera. O que las cuarentenas son maniobras de los gobiernos para parar las protestas y las manifestaciones.

Rechazar la cuarentena por esos argumentos es equivocado. La realidad ha demostrado que es una necesidad para combatir el contagio masivo. Y así lo recomiendan la mayor parte de los especialistas médicos del mundo.

Desde ya que los gobiernos capitalistas usan la pandemia del coronavirus para frenar las movilizaciones, incentivar la presencia policial represiva y de fuerzas militares, cuestión que rechazamos y que también rechazaremos después de la pandemia.

Pero desde la izquierda no podemos minimizar que enfrentamos una pandemia mundial que no ha terminado, que se desconoce su alcance y para la que no existe aún una vacuna. Es una acción para frenar el contagio. En donde no se aplicó en forma inmediata, por responsabilidad de los gobiernos, como en Italia, España, el Reino Unido y los Estados Unidos, el contagio creció exponencialmente. El negacionismo de Trump y la política anti cuarentena para que la economía “no se hunda”, defendiendo a las multinacionales, hizo que en los Estados Unidos, al momento de escribir esta nota, ya se superó un millón de casos positivos por Covid-19 y más de 57.000 fallecimientos, encabezando la lista mundial por contagios y muertes.

También lo demuestra la experiencia, por ejemplo, de Suecia y Noruega. “Hasta el 12 de marzo ambos países tenían

un número parecido de casos confirmados (672 y 794 respectivamente) y una sola muerte en Noruega. Al otro día, Noruega tomó la decisión de aislar su población mientras Suecia no lo hizo: a partir de ese momento la cantidad de casos en Suecia duplica la de Noruega y la de muertes es siete veces mayor, 1.099 contra 150” (Clarín, 19/4/20).

El hecho de que en la Argentina haya pocos casos (207 muertes) tiene que ver con que se hizo cuarentena anticipada. Lo opuesto sucede en Brasil, que lleva registradas más de 5.000 muertes.

Pero la cuarentena es la primera medida, no la única, para evitar la propagación del contagio y proteger la vida de millones. Además se necesita que el gobierno vuelque plata para que se implementen los tests masivos, fortalecer el servicio de salud, el salario y la comida.

Por eso las cosas no son como las pinta el gobierno de Alberto Fernández. La Argentina y el mundo encaran esta pandemia en medio de la destrucción de los sistemas de salud pública estatales, con altos grados de desigualdad, hacinamiento y de gobiernos patronales que favorecen a los empresarios, a los banqueros y al pago de una deuda externa fraudulenta.

Por eso no hay una verdadera cuarentena pese al enorme sacrificio que hacen millones con su encierro. Hay dos cuarentenas. Una, la de los grandes patrones, de los poderosos que disponen de riqueza y comodidades, y otra, la cuarentena del pueblo trabajador, la de los de abajo, la de los que no les alcanza

el sueldo, se lo rebajan, o directamente no lo tienen porque los despidieron o viven de changas. La de los que en las barriadas populares viven hacinados, no tienen cloacas ni agua segura para lavarse las manos.

El presidente llama a la “responsabilidad individual” o a una necesaria “flexibilización” de la cuarentena para que haya “esparcimiento familiar”. Cuando en realidad la cuarentena está ya “flexibilizada” hace rato por responsabilidad del gobierno y de los empresarios, cuando centenares de miles están obligados a salir a trabajar, en cuestiones no esenciales, presionados por las patronales y porque necesitan dinero para sostener a su familia. También están obligados a romper la cuarentena los trabajadores que tienen que salir a reclamar por despidos, por rebaja

salarial o porque no les dan elementos de seguridad para evitar el contagio del Covid-19. Como el caso de los obreros del frigorífico Penta, que fueron despedidos mientras el gobierno peronista de Kicillof avalaba a la patronal y reprimía a los trabajadores. A ellos se suman las justas protestas de trabajadoras y trabajadores de la salud y de otros sectores de todo el país. Desde Izquierda Socialista apoyamos esas luchas. Ante estos atropellos la clase trabajadora no puede disciplinarse a la cuarentena, tiene el derecho de salir a la calle a reclamar. Repudiamos toda represión o cuestionamiento legal que el gobierno y la Justicia patronal quieran hacer esgrimiendo el argumento de la cuarentena. Cuando son el gobierno nacional y los gobernadores peronistas o de la oposición los que no garantizan la salud, el salario, el trabajo y la comida. De esa forma se lucha también por una verdadera cuarentena para evitar el avance del coronavirus. Más cuando los especialistas dicen que todavía no llegó el pico de la pandemia, que podría ocurrir entre mayo y junio, favorecida por la llegada de las bajas temperaturas. Por eso nos oponemos a “flexibilizar” o tender a levantar la cuarentena por la presión de las grandes patronales, frente a lo cual el gobierno nacional cede porque gobiernan para ellos, con la complicidad de la burocracia sindical. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad seguimos llamando a luchar por un fondo de emergencia sobre la base de altos impuestos a los grandes grupos empresarios, a la banca y dejando de pagar la deuda para que haya una cuarentena con plata para salud, sin despidos ni rebaja salarial y con comida.

Corrupción: los barbijos de Larreta

Escribe **Claudio Funes**

El escándalo por la compra de 1.600 barbijos por parte del Gobierno de PRO de la Ciudad de Buenos Aires de Larreta, con sobreprecios a la empresa Green Salud, creada en octubre de 2019 y sin antecedentes en el rubro, acaba de dar un giro inesperado. Los barbijos están vencidos desde mayo de 2016, confirmó su fabricante, la multinacional 3M.

El escándalo arrancó por el sobreprecio. La firma Green Salud, del abogado Ignacio Sáenz Valiente, le vendió a la Ciudad 1.600 barbijos de la marca 3M a 3.000 pesos la unidad, precio muy por encima del valor de mercado. De hecho,

una prepa compró en los últimos días un modelo similar de la misma marca y pagó menos de 1.000 pesos.

La firma propiedad de Sáenz Valiente no solo aprovechó la pandemia para especular con el precio, sino que ofreció un insumo vencido. Criminal, un atentado a la salud pública.

¿Quién es Sáenz Valiente? Aparte de abogado y propietario del estudio jurídico homónimo, es director del Grupo Cablevisión y Telecom. Su nombre figura en muchos de los fideicomisos del Grupo Clarín.

Es dueño de varias empresas, en una de ellas figura como socio de Rodrigo Miguel, hermano de Felipe, jefe de gabinete

del gobierno de Rodríguez Larreta.

Esto no es todo, en abril de 2019, en uno de los salones de su estudio se realizó el festejo más íntimo de la boda civil de la media hermana por parte de madre de Horacio Rodríguez Larreta. Exigimos castigo para los funcionarios corruptos y para el empresario.



Segundo Conversatorio de los trabajadores de Salud

Nuevamente llevamos adelante el pasado viernes 24 el segundo encuentro virtual de los trabajadores de la salud de Izquierda Socialista, con el aporte de muchas compañeras y compañeros independientes llegando a cincuenta participantes.

Contamos con representantes del interior del país, de Córdoba, Tucumán, Misiones y de quienes trabajamos en el ámbito metropolitano de Capital y Gran Buenos Aires.

Lo primero a destacar es el espíritu de camaradería que recorrió toda la charla y el acuerdo por seguir sumando e intentar coordinar acciones y espacios para impulsar los reclamos por insumos, las condiciones de bioseguridad laborales y la urgente incorporación del personal necesario para poder dar adecuada respuesta frente al pico de la pandemia del Covid-19 previsto para fines de mayo o principios de junio.

También surgió con fuerza el repudio a la campaña que viene desarrollándose desde los distintos gobiernos provinciales y el nacional, volcando la responsabilidad del contagio en el ámbito hospitalario en los profesionales de la salud, por supuestamente

no respetar protocolos y el incorrecto uso del material de aislamiento, cuando lo que ocurre es la falta de elementos en cantidad y calidad adecuadas.

En realidad han de ser esta nueva etapa llamada “cuarentena administrada” y las próximas programadas cada vez más laxas, las que generan las condiciones para la circulación del virus en la misma medida en que se permite e impulsa el aumento de la circulación de las personas para asegurar las ganancias a los grupos económicos.

Precisamente, con el ánimo de salirle al cruce a esa campaña de desprestigio, se acordó unificar la acción propuesta para el martes 28 en los accesos a los hospitales y sanatorios públicos y privados para visibilizar las pésimas condiciones en que debemos trabajar, exponiéndonos permanentemente al contagio del coronavirus.

Fueron muchas las instituciones públicas y privadas donde, a pesar de las fuertes lluvias, presentaron el pasado martes a las 11 las imágenes de trabajadoras y trabajadores reclamando

por nuestros derechos, como en los hospitales Piñero, Penna, Garrahan, Italiano, Durand, Tornú, solo por mencionar algunos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El segundo conversatorio finalizó con un nuevo compromiso común de seguir trabajando por una mayor y mejor coordinación en el camino de la pelea

por una salud pública gratuita, universal y de excelencia, donde nosotros, quienes trabajamos en ella, seamos también parte a la hora de definir las políticas integrales. **Corresponsal**



Rebaja Salarial de 25%: vergonzoso acuerdo entre patronales, burocracia y gobierno

Escribe **Claudio Funes**

Ya hacía varias semanas que las patronales venían planteando que se rebajaran los salarios. De hecho, lo venían realizando en muchos sectores. Ahora han logrado lo que querían con la vergonzosa colaboración de la burocracia sindical traidora y el aval del gobierno.

Así lo establece el “Acta tripartita para consensuar medidas que tiendan al sostenimiento del trabajo y la producción frente al Covid-19” firmada por Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló por la CGT, Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja por la UIA y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Detrás de este rimbombante título hay una sola realidad: la pérdida para millones de trabajadores del 25% de su salario.

En concreto, se plantea que todo trabajador que esté cumpliendo la cuarentena sea encuadrado como “suspendido” durante sesenta días a partir del 1° de abril, recibiendo apenas el 75% del salario neto que le hubiera correspondido. Increíblemente, el acuerdo ni siquiera prohíbe reducciones mayores, sino que dice que, si así las hubiere deberán ser “sometidas a la autoridad de aplicación a fin de evaluar su procedencia, de acuerdo con la situación del sector o de la empresa”. Lo traducimos: sucederá que, con acuerdo de la burocracia sindical traidora y la patronal se presentarán justificaciones para reducciones mayores, que obviamente la “autoridad de aplicación”, léase el Ministerio de Trabajo, terminará avalando.

Encima, este acuerdo ni siquiera retrotrae las innumerables situaciones de reducciones salariales y abusos cometidos previamente por las patronales (repetimos, con la complicidad de



la burocracia). Así se establece que “no será de aplicación para la situación de quienes hubieren ya acordado o acuerden en el futuro otros criterios de suspensión”. Así quedan bendecidas las reducciones salariales previas (y mayores) de los petroleros privados, la UOM, las terminales automotrices, o las empresas de comida rápida. Se trata nada más ni nada menos que de 231.483 suspensiones y rebajas salariales en lo que va de la cuarentena, con los metalúrgicos a la cabeza con 126.000 casos, seguidos por los petroleros con otros 64.500. Si se agrega el resto de los sectores, ya eran 300.000 los trabajadores a los que se les habían recortado los salarios antes del acta acuerdo.

En síntesis, este acta acuerdo cumple la función de plantear una reducción generalizada de 25% de los salarios para todos los trabajadores en cuarentena, que se suma a todos los otros

“acuerdos” previos de reducción salarial y suspensiones.

El acta dice expresamente que viene a complementar el DNU 376/20, que ya era un gigantesco subsidio a las patronales, por el que se establecía el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El Estado se hace cargo del 50% del salario de los trabajadores del sector privado a través de la Anses (nuevamente a costa de vaciar las cajas jubilatorias).

En concreto, con la excusa de la pandemia las patronales primero logran que el gobierno les subsidie el 50% de los salarios. Ahora a eso le agregan la rebaja salarial de 25 por ciento.

Este reparto de cientos de miles de millones de pesos irá a parar, en su gran mayoría, a las grandes multinacionales negras: automotrices como General Motors, Ford, Volkswagen y otras; a petroleras como

Tecpetrol, Total, Pan American Energy, Shell y Exxon Mobil, pertenecientes al grupo de las once empresas que en los últimos tres años facturó \$2,5 billones en Vaca Muerta mientras recibía millonarios subsidios del Estado.

La excusa de todo esto es que así se “preservarán las fuentes de trabajo”. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de que existe un DNU previo que “prohíbe” despidos y suspensiones (lo mismo que ahora se promueve), este decreto se transformó en un papel sin contenido, como lo demuestran todos los casos ya denunciados en las semanas previas.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad y el sindicalismo combativo denunciamos el papel traidor de la burocracia sindical y seguimos planteando ¡no a ningún tipo de rebaja salarial! ¡Prohibición efectiva de suspensiones y despidos! Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

Córdoba: la mentira de Schiaretti

Escribe **Liliana Olivero**
Legisladora provincial (m.c.)
por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El peronismo gobierna la provincia hace veinte años. Es responsable -con la complicidad de los radicales y la burocracia sindical- de una deuda externa de 166.000 millones de pesos (de los cuales el 95% está en dólares) y de una grave crisis económica, ahora agravada por el coronavirus. Por eso emitió 9.000 millones de pesos en bonos para pagar a proveedores, mientras amenaza con lanzar una cuasimoneda provincial, rebajar el salario de los estatales y postergar el pago de jubilaciones.

En medio de la cuarentena suspendió, sin pago, a 27.000 trabajadores de planes de empleo y capacitación como PPP, PIP y otros. Compañeras y compañeros que hace años cumplen tareas junto a los de planta permanente pero con sueldos de 5.000 a 9.600 pesos por mes. ¡La mitad de la canasta de indigencia!

Ahora Schiaretti rebaja 45% su sueldo y el de la planta política del Ejecutivo y lo imitan los demás poderes. Estamos de acuerdo que todos ellos ganen menos. Cuando en 2002 obtuvimos nuestra banca presenté un proyecto de ley (que fue rechazado por las otras bancadas patronales) para que legisladores y funcionarios políticos ganáramos igual que una maestra con veinte años de antigüedad. Desde entonces, únicamente nuestros legisladores lo cumplen.

Por eso denunciamos que lo de Schiaretti es solo un acto demagógico y tramposo, porque igual ganarán mucho más que el monto que propusimos y solo regirá por el tiempo que dure la cuarentena en lugar de ser permanente. Con el peligro que permitirá justificar el diferimiento del pago de jubilaciones provinciales y la rebaja salarial de estatales y docentes. Algo inaceptable.

Además, ante semejante crisis esta resolución es insuficiente. Mientras el gobierno cede a la presión de las grandes y medianas empresas para volver a trabajar, todos vemos que hoy la mejor protección es la cuarentena. Por lo tanto, miles de trabajadoras y trabajadores, desocupados, los que viven de changas, los suspendidos de los planes de empleo y los de otras actividades no esenciales deben recibir ya una ayuda de emergencia para poder subsistir. Caso contrario, para poder comer se verán obligados a romper la cuarentena aumentando el riesgo de contagio y de perder sus vidas. Asistir a estos trabajadores, además de equipar a los hospitales y a todo su personal, requiere de miles de millones de pesos que se deben obtener a partir de dejar de pagar la millonaria deuda externa provincial, eliminar toda exención impositiva a las grandes empresas y crear un fondo de emergencia con un impuesto a las mismas, los bancos y latifundios. Y también a las grandes fortunas, como Roggio, Urquía, Allende y otros millonarios provinciales.

Sin estas medidas de fondo, lo de Schiaretti es puro verso. Es para no tocar a los usureros ni a los ricos. Ellos



obtuvieron estos últimos años fabulosas ganancias que jamás compartieron con sus trabajadores. En cambio, ahora sí quieren compartirles las pérdidas, por eso se niegan a pagar el 100% del salario que es una ínfima parte de lo que embolsaron. Y con la complicidad de la burocracia sindical peronista y el aval del Ministerio de Trabajo siguen despidiendo, suspendiendo y rebajando salarios. Debemos organizarnos para luchar, como se viene haciendo a nivel mundial, y también aquí, en empresas y gremios. Esta crisis la deben pagar los capitalistas, no los trabajadores.

Abajo la ley de emergencia de Larreta

Escribe **Mercedes de Mendieta**
Legisladora porteña electa
Izquierda Socialista/FIT Unidad

Larreta está impulsando el tratamiento de un proyecto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, denominado "ley de Emergencia", para la atención de la situación económica y financiera generada por la pandemia que, de aprobarse, en lugar de aliviar la situación crítica que aqueja al pueblo trabajador que vive y trabaja en la Ciudad, la agravará.

La iniciativa impulsada por PRO faculta al Ejecutivo para reorientar los recursos económicos y otorgar prioridades sobre la base de descargar la crisis en las trabajadoras y los trabajadores.

Este proyecto, al igual que los anuncios en otras provincias del país, propone que puedan ser congelados los salarios de todas las trabajadoras y trabajadores dependientes del Gobierno de la Ciudad, estatales, docentes, personal de salud, municipales, e incluso pagados en cuotas, algo que no sucedió en la Ciudad más rica del país ni en la crisis de 2001.

En el artículo 17 se expresa con claridad que no se

podrán instrumentar retribuciones extraordinarias ni beneficios como premios, incentivos o suplementos salariales en dinero. En el artículo 19 también se faculta al pago escalonado y/o diferido de haberes de sus nóminas salariales.

Para el caso de la docencia, como denuncia Ademys, se puede ver afectada la segunda cuota de aumento que estaba pendiente para el mes de junio. Pero a su vez plantea para todos los trabajadores una imposibilidad para la reapertura de paritarias, necesaria para no ver rebajado el salario toda vez que la inflación pronosticada en un 50% va a desvalorizar más el salario ante este congelamiento.

En otros pasajes el proyecto plantea el congelamiento de las plantas de trabajadores, impidiendo la incorporación de quienes reemplacen a otros por licencias o jubilaciones, por ejemplo. Y menos aún contempla el pase a planta de trabajadoras y trabajadores precarizados.

Incorpora también el recorte a la obra pública, que afectará a los barrios más precarios, de donde provienen la mayoría de los obreros de la construcción que se quedarán sin empleo y porque las obras pendientes se paralizarán.

De avanzar este proyecto, se estaría atacando exclusivamente a los salarios ya de pobreza de las y los trabajadores estatales, docentes y de los municipales en general, mientras no se afecta la propia deuda pública de la Ciudad



que ha crecido, no se tocan los intereses de los bancos radicados en la capital ni de las grandes empresas privadas que amasaron enormes fortunas con la especulación inmobiliaria y los negociados. Se privilegian los intereses de los ricos a costa de la pobreza del pueblo trabajador.

Llamamos a los trabajadores de la Ciudad a rechazar este nuevo proyecto ajustador de Larreta.

NACIONAL

¡Impuesto a las grandes fortunas y ganancias ya!

Escribe **José Castillo**

Nadie duda que estamos ante una emergencia. Se necesita con urgencia duplicar el monto que se está destinando a la pandemia. Se requiere tanto para atender las demandas sanitarias (más equipos, más insumos, más hospitales, más trabajadores de la salud con mejores salarios y todos los elementos de protección), como también la crisis social que se ha profundizado en estas semanas (más comida en los barrios populares, dinero para los que han perdido sus ingresos, etcétera). Nuestra posición es clara, se requiere un fondo de emergencia financiado sobre la base del no pago de la deuda y un impuesto especial a las grandes fortunas y a las ganancias de los grupos económicos más importantes.

Con respecto a esto último, desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad hemos presentado una propuesta: un impuesto de 10% a los cincuenta principales millonarios del país y a las veinte empresas que más facturan. El gobierno hace semanas que también viene planteando un proyecto de impuesto a la riqueza, aunque mucho menos riguroso que el nuestro. Venimos sosteniendo que, más allá del debate de cuál es el mejor para la actual coyuntura, lo importante es que se efectivice ya, que no quede en el mero discurso.

Pero la realidad es que siguen pasando los días, la necesidad de los fondos aumenta y el proyecto va y viene. El gobierno primero argumentó que tenía que "coordinar" y "unificar" diferentes propuestas de diversos legisladores oficialistas. Luego la discusión derivó en que no se podía "hacer por decreto" ya que todo lo impositivo tiene "necesariamente" que pasar por el Congreso. Ahí se desató una auténtica comedia de enredos, en la que sin duda aportaron los legisladores de la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Se abrió la discusión bizantina de si es válido sesionar en forma virtual o hay que hacerlo indefectiblemente de manera presencial. Se llegó al ridículo de decir que



había que hacer una primera y única sesión presencial al solo efecto de cambiar el reglamento para que entonces fuera válido sesionar virtualmente. Por si todo esto fuera poco, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió hacer una consulta a la Corte Suprema sobre la validez de las sesiones virtuales, que la Corte respondió diciendo que no era pertinente la pregunta (en concreto, que primero se realice la sesión virtual y luego la propia Corte vería si había sido legal o no). Finalmente, se acordó una salida "mixta", en parte presencial y en parte virtual, a realizarse recién la semana próxima.

¿A dónde va todo esto? Es evidente que las grandes patronales y los propios multimillonarios involucrados están haciendo lo imposible para que no se les aplique impuesto alguno. Para eso embarran la cancha con la inestimable ayuda de la oposición patronal y los jueces. El objetivo es que el tema se alargue y, finalmente, no se trate nunca. El gobierno, por su parte, tampoco hace demasiado por acelerar las cosas.

Queremos ser claros, es absolutamente falso el argumento de exigir el funcionamiento del Congreso en defensa de "la democracia". La verdadera intención detrás de todo esto es postergar todo lo posible y de ser posible que no se apruebe ningún impuesto a los ricos. Por otra parte, aun cuando

el Parlamento llegara a reunirse, ¿qué saldría de allí? Tenemos miles de ejemplos de para quién juega esa cueva de bandidos. Cada vez que se reunió el Congreso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad intervenimos denunciando a los partidos patronales y planteando nuestras propuestas alternativas. Pero no guardamos ninguna expectativa de que de esa "deliberación" de políticos patronales salga algo a favor de los trabajadores.

Esto no quiere decir, tampoco, que le demos un cheque en blanco a Alberto Fernández para que gobierne por decreto. ¡Por supuesto que no aprobamos que se gobierne por DNU! Sabemos que este gobierno, y todos los del mundo,

utilizan la pandemia y la cuarentena como excusa para actuar, ahora y siempre, contra los trabajadores. Y que incluso, cuando emiten alguna resolución que aparentemente "favorece" a los trabajadores, como el DNU que prohíbe suspensiones y despidos, dejan espacios para que sea violado por las patronales junto a la burocracia sindical, para que después el Ministerio de Trabajo homologue esos acuerdos.

Por eso insistimos, no tenemos que caer en la trampa de la discusión entre el Parlamento y el Ejecutivo por sus decretos. Nosotros no tenemos confianza en ninguno de los dos. Ni en ninguna otra institución patronal, como la Justicia (tal como lo podemos ver en la intervención en el tema de la Corte Suprema). Solo creemos en la fuerza de la movilización y las exigencias del pueblo trabajador. Esta es la única presión que puede obligar al gobierno a que, por el mecanismo que fuere, salga el impuesto a los ricos. No nos importa la forma, sino el contenido. ¡Basta de dilaciones! Que se imponga ya mismo que las grandes fortunas y empresas tengan que poner su plata para financiar un fondo de emergencia ante la pandemia. Que esta crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

¿A dónde va la renegociación de la deuda?

Escribe **José Castillo**

El gobierno acaba de presentar oficialmente en Nueva York la oferta de renegociación. De los 66.000 millones de dólares en debate con los buitres privados se reducirán, como mucho, 30.000 millones. Y aún eso está en discusión. Incluso la fecha de “cierre” de la negociación, el 8 de mayo, también está en veredicto.

Termine como termine este capítulo, no es verdad que con esto “se resolvió el tema de la deuda externa”. Porque lo que supuestamente “debemos” llega a 400.000 millones de dólares. Además de esta deuda “en dólares bajo legislación extranjera” queda otro tanto “bajo legislación local”. Más allá de los detalles técnicos hay algo claro, los acreedores son prácticamente los mismos: especuladores internacionales, consorcios de buitres que concentran lo peor del capital financiero internacional.

Y, por si todo esto fuera poco, queda además la deuda con el FMI: los 49.000 millones (entre capital e intereses) tomados durante los dos últimos años de la era Macri y utilizados en su totalidad para financiar la fuga de capitales de los amigos del ex presidente.

Y además tenemos que contabilizar las deudas provinciales y la deuda del Banco Central, que es un negocio redondo de superganancias para los bancos que operan en nuestro país –los mismos que cobran tasas usurarias, se niegan a dar crédito popular y utilizan el propio dinero que le dio el Banco Central para especular con el dólar, haciéndolo subir en estos días–. Y, podemos seguir, tenemos la deuda con el Club de París, con el Banco Mundial y un largo etcétera. Se trata de una bola de nieve que aumenta al infinito. De una deuda que, nunca nos olvidemos, es ilegítima, ya que su origen está en la dictadura genocida; ilegal, tal como lo demostró ya hace casi veinte años el juez Ballesteros en un fallo brillante; y absolutamente inmoral, porque prioriza a buitres chupasangres antes que la vida del pueblo trabajador.

Lo concreto es que cada vencimiento es menos plata para respiradores, hospitales, salarios de trabajadores de la salud, instrumentos de protección, o para comida y dinero para los que se quedaron sin ingresos. Así, solo desde que asumió el actual gobierno, ya se fueron 4.500 millones de dólares.

Alberto Fernández, cuando se presentó la propuesta de renegociación, afirmó que la Argentina “no puede pagar nada”



en estos momentos. Si esto es efectivamente así, entonces hay que pasar de las palabras a los hechos. Sino, es puro doble discurso. Y esto, en la realidad, es dejar inmediatamente de pagar toda la deuda externa y romper con el FMI. Ahí está la plata, junto con un impuesto a las grandes fortunas y empresas, para financiar un fondo de emergencia que resuelva las más urgentes necesidades populares.

Alejandro Olmos: “refinanciar la deuda es continuar por el camino de la decadencia”

Escribe **José Castillo**

Nosotros nunca tuvimos confianza en que el gobierno “iba a priorizar los intereses populares antes que a los acreedores”. Ya desde el año pasado, en plena campaña electoral, explicamos que sin dejar de pagar la deuda y romper el acuerdo con el FMI no había ninguna posibilidad de empezar a resolver las necesidades populares.

Pero sí es cierto que muchos intelectuales nacionales y extranjeros vieron con buenos ojos los distintos discursos del gobierno acerca de “no pagar con el hambre del pueblo”. Claro que una cosa es lo que se dice “para la tribuna” y otra la realidad. Ahora que se conocen ya los detalles de la renegociación en curso con los buitres acreedores hay honestos intelectuales que aclaran que, así, solo se terminará favoreciendo a los acreedores.

Hace pocas semanas escuchamos las advertencias de Eric Toussaint, portavoz de Cadtm –red internacional que aboga por la anulación de la deuda del Tercer Mundo–, quien hizo una extensa aclaración protestando porque varios medios difundieron que con su firma estaba apoyando la decisión que tomó el gobierno argentino. Señaló: “Es necesario declarar la

suspensión inmediata del pago del capital y de los intereses de todas las deudas soberanas. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández no cumplió con esa acción. Por lo tanto, afirmar como lo hacen algunos medios de comunicación que los firmantes apoyan la estrategia de negociación del gobierno es instrumentalizar una convocatoria con el objetivo de sostener al gobierno. Y es inaceptable”.

También Alejandro Olmos, con una extensa trayectoria en denunciar las terribles consecuencias de sometimiento de nuestra



deuda externa, lo ha dicho con todas las letras: “Refinanciar la deuda es continuar por el camino de la decadencia”.

Es que, más allá de estas voces de autoridad que estamos citando, toda la historia reciente nos avala. No es la primera vez que la deuda “se reestructura” con la excusa de que, a partir de ese momento, el problema está solucionado. El primer canje de deuda lo hizo Menem en los años ‘90 entregando el patrimonio nacional a cambio de, supuestamente, bajar el endeudamiento. Ya conocemos el final: nos quedamos sin ferrocarriles, sin teléfonos, sin gas ni petróleo, pero la deuda siguió estando presente, creciendo y llevándonos al abismo.

Luego hubo otra renegociación, en junio de 2001, llamada “megacanje”, realizada por Domingo Cavallo, ministro entonces de De la Rúa. Todo estalló a los pocos meses.

Finalmente, tuvimos los canjes kirchneristas de 2005 y 2010. Todavía está fresco en la memoria cuando se decía que nos habíamos “desendeudado”. Mentira, los Kirchner asumieron debiendo 190.000 millones de dólares, pagaron a lo largo de su mandato más de 200.000 millones y se fueron dejando una deuda de 240.000 millones. Por supuesto, luego vino Macri y llevó la bola de nieve a 400.000 millones.

En síntesis, ni esta ni ninguna “renegociación” resolverá lo que no es otra cosa que una vulgar estafa. Y las estafas no se pagan. Esa es la única conclusión que se puede sacar respecto de esta deuda que, nunca nos olvidemos, es la herencia viva que viene desde la dictadura genocida del ‘76.

SITUACION EN LOS BARRIOS POPULARES

La pobreza trepó al 45%

Escribe **Diego Martínez**

Según estudios recientes, más de 500 millones de personas en el mundo corren riesgo de entrar en la pobreza a raíz de la crisis mundial. Es la consecuencia de las políticas de ajuste y de priorizar el beneficio de los grandes capitales que se aplican en el mundo, incluso en el marco de la pandemia. La Argentina no es la excepción.

De diciembre a hoy la pobreza aumentó 10 por ciento

El Observatorio Social de la UCA dio a conocer datos que sostienen que el índice de pobreza actual sería de 45%, 10% más que la registrada en diciembre del año pasado por el Indec. Según Agustín Salvia, director del Observatorio y uno de los máximos referentes del país en estadísticas sociales, “el aumento de la pobreza se explica no solo a partir de que los trabajadores en negro y cuentapropistas ven reducidos sus ingresos de forma drástica, sino también por el empobrecimiento de sectores medios bajos que entran en la pobreza debido a que las empresas despiden, suspenden, reducen horas o bajan salarios a la mitad” (Perfil, 22/4/2020). Una vez más le exigimos al gobierno de Fernández que haga cumplir la prohibición de despidos, suspensiones y que las patronales paguen salarios en tiempo y forma.

Los problemas entre los más pobres se multiplican

La comida sigue sin alcanzar. En una reunión reciente entre organizaciones sociales, el presidente y funcionarios del gobierno reconocieron que el envío de mercadería estaba “trabado” después del escándalo de corrupción de los sobrepagos en la compra de alimentos. ¡Una verdadera vergüenza! En esa reunión las organizaciones presentes, afines al gobierno, plantearon que se necesitan 16.000 toneladas de alimentos secos para los comedores (Clarín, 24/4/2020). Una cifra que duplica lo que hoy reparte el gobierno.

Además se expande el contagio en los barrios. La propagación del coronavirus en el conurbano bonaerense creció 54%. En La Matanza, el distrito más pobre, este crecimiento fue del 128% en la última semana, siendo el partido con más infectados. Aparecieron también los primeros casos en villas de la Ciudad de Buenos Aires, donde el pueblo trabajador vive en situación de hacinamiento y en muchos casos con falta de agua, lo cual impide tomar las medidas adecuadas para la prevención. A esto se suma el brote del dengue, con más de 12.000 casos en el país, que afecta particularmente a los barrios más pobres.

Alberto Fernández dijo hace algunos días que prefería “tener un 10% más de pobres que 100.000 muertos”. Lamentable-



mente, esa frase que refleja una falsa dicotomía entre cuidarnos de la pandemia o caer en el hambre, se hizo realidad en lo que respecta a la pobreza. El gobierno tiene herramientas a su alcance para cuidar la salud del pueblo trabajador y contener la situación social a la vez. Para eso debe invertir en salud y gastos sociales los 4.500 millones de dólares predestinados al pago de deuda externa y aplicar un impuesto a las grandes riquezas, como el que propone el Frente de Izquierda, que generaría 20.000 millones de dólares más para ese fin. Con esa plata se podría garantizar un ingreso de emergencia mensual, no de 10.000 pesos sino de 30.000, para todo aquel que lo necesite.

Que la crisis no la paguemos las trabajadoras

Escibe **Mercedes Trimarchi** Diputada bonaerense
por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Las consecuencias sociales y económicas de la pandemia aumentan la desigualdad de género. Desde ya que estas diferencias son anteriores a la aparición del Covid-19, pero en este contexto se profundizan. Las mujeres que somos las más pobres entre los pobres estamos sufriendo una mayor precarización de nuestra vida. La informalidad de nuestros trabajos hace que seamos las primeras despedidas y las jefas de los hogares más humildes.

Empecemos por recordar algunos datos que marcan la brecha salarial entre los géneros. Según la ONU (2017), “las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que gana un hombre”, es decir 23% menos. Estos datos son a escala global, pero si los analizamos por regiones la desigualdad se profundiza. En la Argentina la brecha salarial alcanza a 27%, pero aumenta a 36% si se considera el trabajo informal. ¿Por qué sucede esto? Porque en el mercado laboral los puestos destinados para nosotras son los más precarios, informales y, por lo tanto, los peor pagos.

Sí, aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI hay algunos trabajos que son considerados masculinos y otros, femeninos, ligados a los estereotipos de géneros. Así es que se asocia el hombre con la fuerza y la productividad, mientras que a la mujer con las tareas



domésticas y de cuidado. Esto lleva a que haya ramas de la economía feminizadas, como las áreas de limpieza, salud y educación. Por ejemplo, en nuestro país casi el 60% de las trabajadoras registradas figuran en estos tres sectores cobrando los salarios más bajos.

De acuerdo con los últimos datos publicados del Indec, el 35,5% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza (diciembre 2019). En esa franja la mayoría son mujeres. Quienes están a cargo de estos hogares trabajan limpiando casas, haciendo changas o vendiendo en la calle, pero desde que comenzó la cuarentena dejaron de hacerlo y, como consecuencia, aumentó su miseria. Por eso son más las personas que

asisten a los comedores sociales en busca de la vianda de comida. El subsidio de 10.000 pesos (si tuviste la suerte de que te lo den) no alcanza. Estamos ante un verdadero drama social que expone aún más a las mujeres que están a cargo de los hogares más humildes.

Otro tanto ocurre con las trabajadoras de la salud, monotributistas y precarizadas, que deben hacer guardias extenuantes para poder llegar a fin de mes. En el mundo el 85% de los puestos de enfermería están ocupados por mujeres. El contacto con personas contagiadas, su atención, y sin la protección necesaria, hace que estén en peligro. Además son la mayoría de quienes trabajan en geriátricos y residencias para ancianos. Muchas también son madres y, a la vez, cuidadoras de otros miembros de su familia.

Una vez más somos las trabajadoras quienes nos encontramos expuestas y desprotegidas ante esta situación que profundiza la desigualdad preexistente a la pandemia. Necesitamos una cuarentena sin despidos ni suspensiones, sin rebaja salarial y un subsidio –que cubra la canasta básica– para quienes lo soliciten, sin ningún tipo de restricción. El próximo viernes a las 17 el FIT-Unidad realizará un acto virtual por el Día Internacional de lxs Trabajadorxs. Desde Isadora te invitamos a participar a través de las redes de Izquierda Socialista y que conozcas lo que #LaIzquierdaPropone para que la crisis la paguen los capitalistas.

Córdoba: falta de protección en el Ministerio de la Mujer frente al Covid-19

Escibe **Noelia Agüero** • Legisladora provincial
Izquierda Socialista /FIT Unidad

Mediante un comunicado del 22 de abril titulado “¿Quién cuida a las trabajadoras?” se realizó una denuncia pública. Se trata de la Brigada de Protección a la Mujer compuesta por psicólogas y trabajadoras sociales, encargada de atender las situaciones de emergencia y crisis, las activaciones de botón antipánico y tobillera, así como también el acompañamiento en femicidios e intentos de femicidio.

Desde que comenzó la cuarentena las trabajadoras alertaron a las autoridades sobre la situación de uno de los refugios de la institución y señalaron la falta de medidas



de bioseguridad. Lamentablemente fueron desoídas y, al poco tiempo, una persona fue diagnosticada con Covid-19. Esta noticia dejó al descubierto que Schiaretti y la ministra Claudia Martínez no protegen del contagio del virus a las trabajadoras y a las mujeres que se encuentran atravesando situaciones de violencia.

A esto se le suma la precarización laboral, ya que en su gran mayoría son monotributistas y no cuentan con obra social, ART, ni se les respetan derechos laborales básicos. Desde Isadora e Izquierda Socialista nos sumamos al reclamo de las trabajadoras que exigen medidas de seguridad, un bono de emergencia, salario igual a la canasta familiar y el pase a planta de todas las trabajadoras y trabajadores. Solo así se cumplirá el lema “Cuidar a quienes nos cuidan”.

JUVENTUD

Paro de repartidores: “No somos superhéroes, somos superexplotados”

Escibe **Barby Pick**

Con el hashtag #YoNoReparto se visibilizó el paro internacional que llevaron adelante los repartidores el 22 de abril pasado.

Trabajadores de reparto de las apps Glovo, Rappi, Pedidos Ya, Uber Eats, entre otras, realizaron un paro de actividades coordinado con trabajadores de seis países para reclamar mejores condiciones laborales. Exigen “100% de aumento del pago por pedido y elementos de seguridad e higiene que sean de calidad y en cantidad”, acorde con la tarea que realizan en plena crisis sanitaria, además de una reducción de la jornada laboral sin que suspendan sus cuentas.

La juventud es uno de los sectores que más sufre las consecuencias de la precarización laboral, dos de cada diez

jóvenes están desempleados (Indec). Eso explica que entre Rappi y Glovo estén registrados alrededor de 18.000 repartidores.

La medida del gobierno de considerar la tarea de reparto como esencial sin garantizar derechos de resguardo y salariales se tradujo en superexplotación para los trabajadores y superganancias para las empresas.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores de reparto y exigimos que se cumplan de inmediato sus reclamos, se prohíban despidos y suspensiones y se les otorguen licencias con goce de sueldo para todos los trabajadores que deban permanecer en sus hogares.



Necesitamos una cuarentena sin represión

Escribe **Nicolás Nuñez** • Legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Una publicidad oficial dice que en el número en el cual se puede denunciar a quienes no cumplen la cuarentena, también se puede denunciar si algún efectivo comete algún “exceso en su deber”. Al oído desprevenido puede dar a entender que el gobierno está preocupado por garantizar que no existan atropellos policiales, pero la realidad dista enormemente de ello. Para muestra basta un botón: a pesar de que el propio Ministro de Seguridad Sergio Berni se hizo presente después de la represión en el frigorífico Penta prometiendo que los efectivos que agredieron a los trabajadores iban a ser removidos, los mismos efectivos siguen haciéndose presente diariamente en la puerta de la empresa donde los compañeros siguen organizándose.

A esto hay que sumar una multiplicación diaria de los casos de maltratos policiales, detenciones arbitrarias, golpizas, violaciones, y hasta muertes dentro de las comisarías que se dan a lo ancho y largo del país. Al gobierno desde ya que no puede resultar inadvertido esta realidad. Más bien, el hecho concreto es que estos hechos aberrantes son el complemento de un enorme aparataje de intimidación judicial con el que hasta este lunes 27, según el reporte de Correpí, se abrieron causas a 4.052.286 personas. Casi uno de cada diez argentinos, y con miles y miles de personas que denuncian que la aprehensión policial se produjo mientras realizaban alguna de las actividades permitidas por el gobierno, como salir a hacer las compras.

Esta violencia para con los sectores populares desde ya que no tiene ningún equivalente a la hora de castigar a los empresarios que remarcan precios, que violan el decreto de prohibición de despidos, o que obligan a los trabajadores a armar habitaciones truchas de circulación para que vuelvan a las fábricas. Como venimos señalando junto a los organismos de Derechos Humanos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, bajo el lema de “hacer cumplir la cuarentena” existe una clara política de fortalecimiento y luz verde a las fuerzas represivas con el objetivo de darles mayor poder a la hora de regimentar la vida social. Algo que desde ya va de la mano del llamado “ciberpatrullaje” con el que se imputó a un joven por tuitear la palabra “saqueo”.

Que esto puede estar relacionado incluso con la intención de preparar su intervención para reprimir la protesta social es algo que excede a una mera especulación si vemos por ejemplo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta compró bajo carácter de urgencia equipamiento “antidisturbios” por 53 millones de pesos. La plata que no va para la protección en los hospitales, va destinada a pertrechar a la policía metropolitana frente a las protestas que van a despertar las políticas de ajuste brutal que anuncia el gobierno porteño con su “ley de emergencia”.

Pero el colmo desde el punto de vista simbólico de esta política de embellecimiento al aparato represivo lo tuvimos con



la decisión anunciada de mandar al ejército a “armar barbijos” a la ESMA. Un sitio de memoria por el que se calcula pasaron 5.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, en un cúmulo de crímenes de lesa humanidad aún impunes cometidos por la última dictadura cívico-militar.

Desde Izquierda Socialista decimos nuevamente que repudiamos la política de empoderamiento de las fuerzas represivas, reclamamos el fin de la represión, y la remoción real e inmediata de todos los efectivos que están cometiendo estos atropellos en todo el país. Llamamos nuevamente a sostener la guardia en alto contra la pandemia, pero también contra la violencia estatal, exigiendo una cuarentena sin represión.

El sistema penitenciario y la pandemia

Escriben **Belén y Cristian**, Juventud de Izquierda Socialista Facultad de Derecho UBA

El Sistema Penitenciario Argentino vive su propia pandemia, que viene de décadas de desidia estatal, mucho antes de que la Organización Mundial de la Salud calificara como tal al Covid-19.

Los números hablan por sí mismos. El último censo estableció que el Sistema Penitenciario Federal (SPF) se encuentra funcionando al 106,75% de su capacidad. La posibilidad, entonces, de que la circulación del virus dentro de los penales provoque una masacre es inminente. El hacinamiento y la sobrepoblación hacen de las unidades penitenciarias un foco de riesgo para la vida de las personas detenidas.

Ante esta situación, en los últimos días se dieron estallidos en diferentes unidades penitenciarias que fueron salvajemente reprimidas por los guardias y dejaron decenas de heridos graves y dos muertos (José Candía y Federico Rey). Estos fueron difundidos por todos los medios bajo el título de “motines”. Sin embargo, desde el interior de los penales, los detenidos dejaron en claro que se trata de reclamos por medidas concretas para hacer frente al coronavirus.



Las personas detenidas, que comenzaron las protestas llevando a cabo huelgas de hambre pacíficas y tomando los techos de los penales, reclaman que se les otorgue el beneficio de prisión domiciliaria a quienes pertenecen a grupos de riesgo (mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo) y a quienes estén en condiciones de recibirlo o cerca de cumplir sus condenas. Todo para combatir la sobrepoblación carcelaria. Además, solicitan que se provean los elementos necesarios de higiene y se garantice la correcta atención sanitaria. Hasta el momento, en la cárcel de

Devoto se llegó a un acuerdo que abarcaría a la población carcelaria de todo el SPF, luego de un proceso de lucha que incluyó la toma del penal en casi su totalidad.

Cabe destacar que, de la totalidad de detenidos, el 90% cumplen penas por delitos contra la propiedad o por venta al menudeo de sustancias prohibidas. Además, más del 60% de la población de las cárceles están bajo la modalidad de prisión preventiva. Esto quiere decir que dos de cada tres presos no tienen condena firme. Mientras la prisión preventiva, en lugar de ser una medida de excepción, es moneda corriente para personas de sectores populares, militares genocidas y políticos corruptos son liberados o aprovechan para pedir prisiones domiciliarias y todo tipo de beneficios.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, sostenemos que se deben tomar medidas de fondo para revertir la situación. Se debe realizar el testeo de la totalidad de los detenidos en las cárceles con casos confirmados, otorgar prisión domiciliaria o libertad anticipada a todos los detenidos con condenas menores a tres años o sin condena firme (excluyendo de estos a los acusados de homicidio, femicidio, violación, corrupción y delitos de lesa humanidad) que forman parte de los grupos de riesgo y proveer a las unidades penitenciarias de insumos sanitarios y de higiene.

DOCENTES

Salarios, situación laboral y educación virtual: la docencia exige respuestas

Escribe **Daniela Vergara**
Secretaria de Cultura de Amsafe Rosario

La situación educativa y laboral docente y de la comunidad educativa en cuarentena requiere respuestas urgentes del gobierno nacional y en las provincias. Desde Docentes en Marcha impulsamos organizar acciones para lograr soluciones, mientras les exigimos a los dirigentes de Ctera y de los gremios provinciales que reclamen la reapertura de las paritarias y peleen por nuestros derechos.

Desde los distintos sindicatos donde actuamos estamos reclamando la inmediata regularización del pago de salarios a miles de docentes que no han cobrado en varias

provincias, como en Neuquén, Buenos Aires o Chubut. También de todos los cargos provisionales y suplentes que no fueron designados, porque los gobiernos suspendieron los ofrecimientos y los actos públicos. El gobierno retiene el dinero de los salarios, provocando que los docentes, al no poder tomar sus horas, cargos o módulos, pasen a vivir en situación de pobreza. Exigimos inmediatos ofrecimientos con mecanismos virtuales, como comenzaron a realizarse en Río Negro o Entre Ríos, retroactivos al 16 de marzo. Reclamamos lo mismo para los docentes de Plan Fines, Programas



Socioeducativos y de creación y desdoblamiento de cursos.

Remarcamos la urgente necesidad de que a las y los docentes que están en situación laboral irregular se les pague al menos 30.000 pesos y que ningún docente cobre menos que la

Salarios, situación laboral y educación virtual ...

carga horaria que tenía en diciembre de 2019. Que todos mantengan la cobertura de las Obras Sociales y ART. Que se respeten todas las licencias médicas extraordinarias y crónicas, que algunos gobiernos están levantando con el argumento de que las tareas ahora son "virtuales". Además, exigimos un inmediato aumento salarial de emergencia, que acompañe a los tremendos aumentos del costo de vida.

Es necesaria la reparación y concreción de todas las obras edilicias, aplicando todos los protocolos de bio-seguridad, para que cuando se retomen las clases se vuelva en condiciones dignas de enseñanza. Y que se realice la construcción de nuevas aulas y escuelas necesarias de todos los niveles, para evitar el hacinamiento de los estudiantes y los docentes.

La mentira de la "educación virtual" a distancia

El gobierno dice que está garantizando la educación a través del "sistema virtual". Pero tanto docentes, como estudiantes y familias, sabemos no es así. Todo es improvisación, sin la infraestructura tecnológica necesaria, discriminando a las familias más pobres y así acrecentando la brecha educativa social.

Reclamamos que el gobierno garantice el inmediato

acceso gratuito a la conectividad de redes y telefonía para todos. Que se repartan los dispositivos digitales necesarios (netbooks, celulares, tablets, PC, etcétera) a estudiantes y docentes, porque millones dependen de un solo celular o una PC para toda la familia.

Se han improvisado cuadernillos que tienen graves errores y contrarios a las características de cada nivel o modalidad del sistema y que se apoyan en programas de TV que son los mismos de siempre. Las actividades y métodos para la educación "virtual" deben ser el resultado de acuerdos y consensos que surjan en las escuelas entre las docentes, tomando en cuenta la realidad social, económica, cultural de las y los alumnos y sus familias.

Denunciamos que hay una gran sobrecarga laboral, con funcionarios que persiguen con tareas y "resultados pedagógicos" a los docentes, con evaluaciones e informes de todo tipo, sin que se nos respeten los horarios de trabajo. Como docentes estamos tratando de acompañar y vincularnos con las familias, estableciendo los criterios educativos necesarios. Al finalizar la cuarentena, llegará el momento de diagnosticar la situación educativa y definir la forma de darle continuidad a la enseñanza.

Que la Ctera y los gremios provinciales dejen de mirar para otro lado

Es inadmisibles que los dirigentes nacionales de Ctera, Sonia Alesso, Baradel y sus aliados de la agrupación "Celeste" en las provincias (López en Ciudad de Buenos Aires, Monserrat en Córdoba, Guagliardo en Neuquén, Goodman en Chubut, etcétera) ante esta situación de atropellos salariales y laborales, y el caos de la mal llamada "educación virtual", no hagan nada para defender a los docentes y a la escuela pública. Su política es de Pacto Social con el gobierno, por sobre los intereses de la docencia.

Firmaron en marzo una paritaria nacional aceptando que todo el salario perdido por la inflación de 2019 no se recuperara. Y que, en 2020, con un vergonzoso aumento de tan sólo 1.250 pesos, también corrieramos detrás de los aumentos de precios y que nuestros salarios ya no alcancen para nada. En muchas provincias, además, los gobernadores ni siquiera cumplen los acuerdos paritarios.

Llamamos a la docencia a organizarnos y a exigirles que rompan su tregua con el gobierno nacional y los gobernadores, para reclamar por nuestros derechos. Mientras, seguimos impulsando la coordinación del sindicalismo docente combativo y los sectores opositores, para coordinar acciones en defensa de nuestros salarios y la escuela pública.

SINDICAL

Subte: apoyemos a Rocío Córdoba, Maximiliano Barrera y Walter Gayoso

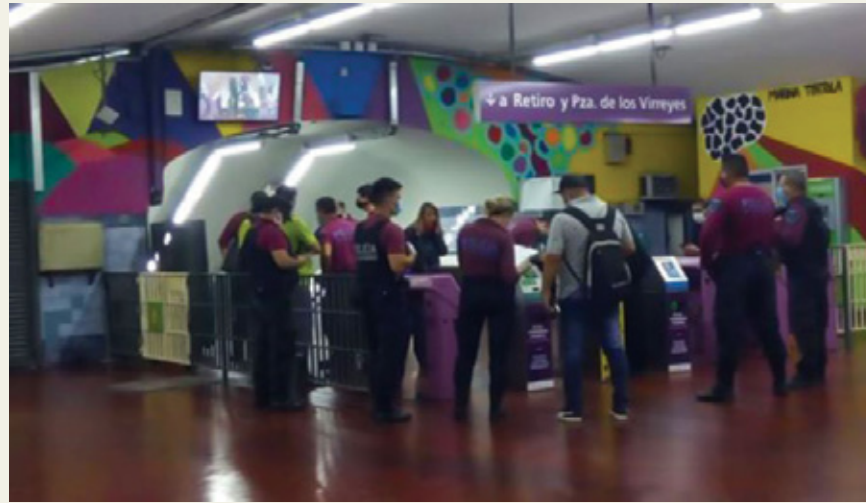
Escribe **Javier Leonforte**

El pasado miércoles 22 un trabajador del turno noche del sector limpieza de la Línea E del subte dio positivo en Covid-19. La reacción de la empresa Metrovías fue muy irresponsable, negando y ocultando información vital para tomar medidas de protección acordes para esclarecer posibles cadenas de contagio y resguardar a los trabajadores.

Previo a la llegada de la pandemia, los trabajadores habían reclamado por la falta de personal de limpieza y de inversiones en infraestructura. El subte cuenta con personal insuficiente para cubrir las necesidades corrientes de limpieza e higiene.

Con el inicio de la cuarentena obligatoria la patronal dispuso el refuerzo de la limpieza en ámbitos limitados, como son los sectores de tráfico, para conductores, guardas y personal jerárquico, y establecieron un esquema de limpieza de las formaciones en cada cabecera. El resto de los sectores quedaron invisibilizados, sin la higiene indispensable por faltante de personal de limpieza, tanto en las estaciones intermedias como en los cuartos de descanso, las boleterías y otros espacios comunes. Los trabajadores de limpieza se vieron doblemente afectados, ya que la empresa les aumentó la carga laboral intensificando notablemente su ritmo de trabajo, y los dejó expuestos a sufrir el contagio al no tomar las medidas de protección adecuadas. Por ejemplo, la lavandina se rebaja al punto de transformarse en agua.

Por todo esto, los delegados de estaciones (boletería y



limpieza) de la Línea E decidieron paralizar el servicio hasta lograr que la empresa y los entes reguladores garanticen la modificación de las condiciones laborales deficientes, exigiendo la apertura de la bolsa de trabajo e incorporaciones para cubrir puestos de limpieza, implementación de test masivos en todos los trabajadores con frecuencia quincenal para detectar a tiempo casos positivos de Covid-19, la creación de un comité mixto de trabajadores que verifique de forma conjunta la limpieza, desinfección y fumigación de los ámbitos de trabajo, provisiones constantes de material de trabajo y de elementos de limpieza para garantizar una desinfección segura y material de protección adecuado a la función de riesgo para los trabajadores que se ven expuestos.

Frente a la medida gremial el gobierno de Larreta y la patronal Metrovías libraron el orden de detención contra Walter Gayoso (integrante de la comisión directiva por la oposición Multicolor), Rocío Córdoba y Maximiliano Barrera (metrodelegados), trabajadores de la Línea E trasladados a la Comisaría N° 10.

En rechazo a las detenciones de los trabajadores de la Línea E, encabezado por la oposición Multicolor, se realizó un paro activo en solidaridad. Ademys, el cuerpo de delegados del Ferrocarril Sarmiento y otros sectores del sindicalismo combativo sacaron pronunciamientos reclamando la liberación y el cumplimiento de los reclamos obreros.

Jorge Adaro, de Ademys; la legisladora Alejandrina Barry, del PTS/FIT Unidad; Fernando "Cuervo" Rodríguez, delegado ferroviario del Sarmiento; Claudio Dellecarbonara y otros compañeros estuvieron en la comisaría acompañando a los tres trabajadores, que fueron liberados a las horas.

La policía y la Justicia detienen injustamente a los trabajadores que reclaman. Una barbaridad. La conducción kirchnerista de Pianelli y Segovia del sindicato del subte lamentablemente no impulsó ninguna medida gremial en repudio a las detenciones, cuando debieron ponerse a la cabeza de los reclamos para hacer cumplir los derechos de los trabajadores del subte. Llamamos a rodear de solidaridad a Walter, Rocío y Maxi, así como a todos los trabajadores que se plantan contra la desidia patronal.

Penta en pie de lucha

Escribe **Martín Fú**

Los trabajadores del frigorífico Penta la semana pasada se movilizaron hasta el Puente Pueyrredón. Recibieron la solidaridad de los vecinos y otros trabajadores que acompañaron esta medida, mostrando su decisión de seguir peleando y que la pandemia y la cuarentena no son un freno para reclamar lo que les corresponde. Una nutrida columna de trabajadores, que respetaron el protocolo de distanciamiento social, contó con el acompañamiento de los compañeros docentes de Ademys y los Suteba Multicolor, estatales de ATE y ferroviarios, entre otros. La movilización, que tenía como destino Plaza de Mayo, fue interrumpida por un importante despliegue de Gendarmería y Prefectura.

Distintas organizaciones políticas de izquierda, como nuestro partido, Izquierda Socialista, formaron parte de la columna que marchó junto a los obreros que reclaman por su fuente de trabajo, los salarios adeudados y que el gobierno de Kicillof haga respetar la conciliación obligatoria

dictada por el Ministerio de Trabajo, que insta al frigorífico del empresario peronista Ricardo Bruzzese a terminar con el lockout y volver a la producción con sus 240 trabajadores adentro. En medio de una pandemia es inadmisibles la pérdida de puestos de trabajo y que una empresa que produce alimentos no esté operando.

Los trabajadores siguen manteniendo la olla popular en la puerta de la planta, que se encuentra cerrada desde mediados de marzo, luego de que la empresa decidiera el lockout y echar a sus trabajadores. Bruzzese sigue operando a través de otros frigoríficos y es parte de la Mesa contra el Hambre, impulsada por el gobierno nacional. El empresario es conocido por llevar adelante prácticas antisindicales mafiosas, pagar en negro a sus trabajadores, no cumplir los acuerdos paritarios y recurrir a patotas para arremeter contra sus empleados. Para seguir peleando, se ha creado un fondo de lucha donde han aportado Ademys, los Suteba Multicolor, los telefónicos de la lista Roja, la junta interna del hospital Garrahan, los ferroviarios del Sarmiento y



tantos otros que colaboraron y seguirán haciéndolo.

Llamamos a redoblar el apoyo a los trabajadores de Penta y seguiremos impulsando y acompañando el fondo de lucha.

Neuquén: reclamos con paros y movilizaciones

En medio de la cuarentena, trabajadores de varios sectores de la provincia se movilizan reclamando distintas demandas. Los empleados de la salud de los principales hospitales de la capital neuquina salieron encolumnados, con barbijos y manteniendo distancia, a abrazar los edificios exigiendo ropa de trabajo adecuada y material para cuidar su salud, el pago del bono estipulado por Nación, que no se concretó en la provincia, el pago en tiempo y forma de los salarios ante la amenaza del gobierno provincial de abonar desdoblado, y la actualización trimestral según el IPC pactada en paritarias. Por otro lado, los trescientos mineros que explotan el oro en la ciudad de Andacollo cortaron durante varios días la ruta 40, la principal vía cordillerana del país, exigiendo a la empresa Trident Southern Explorations que les paguen los sueldos del mes de marzo ante la pasividad del gobierno, que es el concedente de la explotación y no hace nada desde el Ministerio de Trabajo.

Por otra parte, dirigentes de seccionales opositoras del sindicato docente ATEN, entre los que se encuentran Angélica Lagunas y Diego Rubilar, integrantes por la minoría de la directiva de Capital, vienen reclamando que se paguen los salarios adeudados a cerca de mil docentes y que también se adjudiquen las horas y cargos pendientes de cubrir en los distintos niveles educativos que dejan a miles de estudiantes sin sus docentes y a cientos de maestros desocupados. El reclamo consiguió que durante el fin de semana se le pagará a una minoría de los docentes. Ahora, desde la dirigencia opositora a la conducción kirchnerista de ATEN, se está planificando un reclamo callejero para el curso de la semana.

Por último, desde la seccional UTA, los choferes de colectivos están en estado de alerta ante el riesgo de que a principios de mayo se repita el atraso salarial de abril, que llevó a paros del transporte en la capital neuquina durante dos días.

Chubut: textiles marcharon contra rebaja salarial

En Trelew quinientos trabajadores del sector marcharon en rechazo al acuerdo firmado por la conducción de la Federación Argentina de Industrias Textiles (FITA), que habilita a las patronales a descontar la mitad del salario a los trabajadores que están cumpliendo cuarentena. Esto generó indignación entre la mayoría de los textiles que en su marcha le pidieron al intendente de Trelew que interceda por este escandaloso y vergonzoso acuerdo firmado a espaldas y contra los trabajadores.

La movilización en defensa del salario se dio cumpliendo con la distancia necesaria en medio de la pandemia y mostró la coordinación de las bases de varias fábricas de Trelew en donde sus trabajadores rechazaron de pleno el acuerdo entre el sindicato y las patronales textiles. A dos años del comienzo de las movilizaciones de estatales que pusieron en jaque al gobernador



Arcioni, es el turno de los textiles de fábricas como Soltex, Pelama, Unilan, Tendraz y Sedamil que ganan las calles y hacen público su reclamo y pelea.

Rechazo a recortes salariales en Acindar La Matanza

Acindar es una de las siderúrgicas más importantes de la Argentina. Cuenta con distintas plantas en el país, tuvo ganancias en 2019 por más de 5.000 millones de pesos y es filial del grupo económico multinacional ArcelorMittal, con presencia en sesenta países. Participa también del negocio de la minería. Ahora busca reducir 25% los salarios. Los trabajadores de la planta de La Matanza rechazan la rebaja, frente a lo cual la empresa presiona con suspensiones. Debido al repudio entre la base metalúrgica, la UOM La Matanza tuvo que posicionarse en contra de la postura de la patronal, pese a que a nivel nacional el sindicato propone, en acuerdo con las empresas del sector, una rebaja salarial de 30%. Apoyamos la lucha de los metalúrgicos y llamamos al gobierno nacional a tomar cartas en el asunto. Un “coloso del acero”, como llaman a Acindar, tiene espaldas económica para pagar los salarios en su totalidad

Textil Iberoamericana en lucha

El pasado viernes 24 trabajadores de la textil ubicada en Ramos Mejía hicieron una olla popular en la puerta de la fábrica. Allí llevamos la solidaridad de nuestro partido con una delegación de compañeros, entre ellos Graciela Calderón, secretaria adjunta de Suteba La Matanza. Los compañeros reclaman el pago adeudado de salarios. Hace tres años que cobran de forma irregular. Este año la empresa se comprometió a pagar la deuda con un esquema que iba a comenzar en febrero. Desde entonces la patronal no solo incumplió el acuerdo, sino que hace dos meses que los cien trabajadores de la fábrica no cobran un peso. Frente a esta situación, ninguno de los dos gremios del sector que actúan en la fábrica (AOT y Setia) acompañó el reclamo. Tampoco ofreció una solución al problema el municipio, a cargo del peronista Espinoza, siendo que la textil podría fabricar camisolines y barbijos de frisolina, de gran utilidad para equipar al personal de salud municipal que no cuenta con los insumos adecuados para su protección. ¡Que la patronal pague los salarios ya

Mondelez Victoria, en peligro de cierre

La multinacional de la alimentación, ex Kraft, con dos

plantas en Victoria y Pacheco, ha “invitado” a los obreros de Victoria a aceptar un traspaso al establecimiento de Pacheco. El sindicato y la comisión interna, en manos de la burocracia, se han prestado otra vez como voceros de la patronal, que argumenta que la caída de la venta de chocolates (con producción en Victoria) y el aumento de la venta de galletitas, que se hacen en Pacheco, hacen necesaria la reestructuración y la mudanza. Los trabajadores

denuncian un posible intento de cerrar la planta de Victoria de manera definitiva y dejar en la calle a la mayor parte de sus empleados.

La Nirva: que se paguen los salarios adeudados

Los trabajadores de La Nirva, fábrica ubicada en La Matanza, que produce los alfajores “Grandote” y “Recoleta” se encuentran en pie de lucha en reclamo del pago de los salarios adeudados por la patronal. Hace seis meses vienen con problemas de cobro. La empresa se comprometió a pagar su deuda, pero estafó a los trabajadores dándoles cheques sin fondo. ¡Una vergüenza! Frente a esta situación los trabajadores (sin el apoyo del sindicato de pasteleros, que está borrado) se reunieron en asamblea y decidieron movilizarse a la municipalidad de La Matanza este miércoles 29. Desde Izquierda Socialista venimos acompañando a los trabajadores en su reclamo y estaremos presentes en la movilización.

Pandy Toys rebaja salarios

La conocida cadena de jugueterías de zona norte de Buenos Aires, que tiene locales en zonas exclusivas como Nordelta o San Isidro, entre otras, rebajó 70% los salarios y demora su pago.

Los trabajadores denuncian a la patronal por las condiciones de precarización en las que se encontraban trabajando, el incumplimiento del pago de salarios en tiempo y forma, y que la empresa hace oídos sordos a los reclamos, invitando a sus empleados a “que si no les gusta, ya saben”.

Latin Assistance despide

La empresa internacional de seguros de viajeros con sedes en México, Brasil y Chile –entre la mayoría de los países de Latinoamérica– ha despedido al 80% de sus empleados de la filial argentina con base en San Isidro, Buenos Aires. La patronal envió sendas cartas documento argumentando “causa mayor y ajenas a la empresa”. A estos despidos injustificados y arbitrarios se agregó la suspensión del 20% de la planta restante. Los trabajadores denuncian que el sindicato de Comercio no se pronunció, y que la firma, aparte de despedir y suspender, no estaría dando respuesta a la cobertura de quienes contratan sus servicios. Reclamamos la reincorporación inmediata de todos los despedidos.

¿Por qué se conmemora el 1° de Mayo como día Internacional de los Trabajadores?

El 1° de mayo de 1886 estalló una huelga en Estados Unidos por la jornada laboral de ocho horas. En Chicago, el conflicto recrudeció y la policía asesinó a manifestantes. El gobierno culpó a varios de sus dirigentes, que fueron encarcelados y asesinados.

Pasarían a la historia como “los mártires de Chicago”. En 1889, la Internacional Socialista declaró ese día como jornada de lucha obrera, socialista e internacionalista.

Escribe **Francisco Moreira**

A lo largo del siglo XIX se dio un avance arrollador de la industria capitalista. Las enormes ganancias se obtenían a costa de la brutal explotación de los obreros y obreras, quienes debían realizar jornadas de trabajo extenuantes de doce horas en promedio, con salarios muy bajos y viviendo en miserables condiciones. Pero a mediados de 1800 comenzaron a tomar fuerza las luchas obreras que exigían mejoras en las condiciones laborales. Uno de los reclamos más generalizados fue la jornada laboral de ocho horas.

Los mártires de Chicago

En Estados Unidos, tras años de luchas reivindicativas, en 1881 se constituyó la American Federation of Labor (Federación Norteamericana del Trabajo). Desde su nacimiento, exigió el cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas. Pero las dilaciones y negativas patronales la llevaron a anunciar en 1884 que, si para el 1° de mayo de 1886 no se había implementado en todos los lugares de trabajo, comenzaría la huelga. La fecha llegó sin respuestas y la huelga estalló, a pesar de las propias dudas de muchos dirigentes sindicales. Nunca antes el país había vivido un levantamiento obrero de esas dimensiones. Más de cinco mil fábricas pararon y 340.000 obreros salieron a las calles y plazas a manifestar sus exigencias: “¡8 horas de trabajo! ¡8 horas de reposo! ¡8 horas de recreación!”. Ese mismo día, unos 125.000 obreros conquistaron la jornada laboral de ocho horas. A fin de mes, otros 200.000. Para fin de año, un millón ya la había logrado.

Pero en Chicago, uno de los grandes centros comerciales e industriales, los sucesos tomaron un giro dramático. Los obreros y obreras allí vivían en peores condiciones. Muchos trabajaban todavía catorce horas diarias. Numerosas familias habitaban hacinadas. Por eso el 2 de mayo la huelga continuó y la policía dispersó salvajemente una concentración de 50.000 trabajadores en el centro de la ciudad. Al día siguiente, la



policía volvió a reprimir y asesinó a seis trabajadores que se encontraban en una protesta frente a la fábrica de maquinaria agrícola McCormik. El 4 de mayo, al finalizar un acto en la plaza Haymarket, convocado para denunciar esos brutales asesinatos, la policía volvió a cargar contra la multitud. Murieron treinta y ocho obreros. Durante la noche, el gobierno decretó el estado de sitio, estableció el toque de queda, los militares ocuparon los barrios obreros y organizaron violentas razias en locales sindicales y hogares de dirigentes obreros. El gobierno culpó a anarquistas y socialistas por lo sucedido. Los dirigentes y activistas August Spies, Albert Parsons, Samuel Fielden, Adolph Fischer, George Engel, Michael Schwab, Louis Lingg y Oscar Neebe fueron llevados a un juicio maniatado en el que les impuso a cinco de ellos la pena de muerte. Su crimen había sido exigir un límite horario a la explotación laboral. Pasaron a la historia como “los mártires de Chicago”.

Una jornada de lucha obrera, socialista e internacionalista

En 1889, cuando se fundó la Internacional Socialista (Segunda Internacional), se resolvió impulsar la jornada del 1° de Mayo para unificar las luchas obreras en todos los países. El congreso, reunido en París, denunció que el avance de la producción capitalista “implica la explotación creciente de la clase obrera por la burguesía [...] y tiene por consecuencia la opresión política de la clase obrera, su servidumbre económica y su degeneración física y moral”. Por ello, establecía que los

trabajadores de todos los países tenían “el deber de luchar por todos los medios a su alcance contra una organización social que les aplasta y, al mismo tiempo, que amenaza el libre desenvolvimiento de la humanidad”.

Al año siguiente, por primera vez, marcharon miles de obreros en decenas de ciudades del mundo en homenaje a los mártires de Chicago, por la jornada de ocho horas y otros reclamos y por el socialismo. Así, de la mano del socialismo revolucionario nació la tradición del 1° de Mayo como una jornada de lucha obrera, socialista e internacionalista.

El 1° de Mayo en la Argentina

En nuestro país, unos tres mil trabajadores se reunieron en el Prado Español (Recoleta) en aquella jornada del 1° de mayo en 1890. En su mayoría, eran inmigrantes sometidos a condiciones inhumanas de explotación, que daban los primeros pasos del movimiento obrero en la Argentina. Desde esa jornada, la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores pasó por los avatares de la lucha de clases del país y la política de las direcciones mayoritarias del movimiento obrero.

El 1° de mayo de 1909 un acto anarquista en plaza Lorea (hoy parte de plaza Congreso) fue reprimido por orden del jefe de policía Ramón Falcón. La muerte de ocho obreros desencadenó una huelga general que exigía la renuncia del jefe de policía. Seis meses después, el joven obrero anarquista Simón Radowitzky hizo justicia por mano propia y lo asesinó. Esa noche se desató otra brutal represión bajo el estado de sitio, con cientos de detenidos, torturados y deportados por la Ley de Residencia.

En las décadas de 1920 y 1930 el avance de direcciones reformistas en el movimiento obrero, primero los sindicalistas y socialdemócratas (PS), y después los estalinistas (PC), fueron transformando el 1° de Mayo en una jornada “democrática”, de apoyo a los gobiernos o sectores “progresistas” patronales. Finalmente, en 1947, Perón impuso la “Fiesta del Trabajo”, un día de festejo, bailes, desfiles y hasta la elección de la “reina del trabajo”. Así buscó transformar la jornada del 1° de Mayo en un día festivo o de descanso.

Los socialistas revolucionarios seguimos conmemorando el 1° de Mayo como una jornada de lucha obrera, socialista e internacionalista. Un día para honrar a los mártires de la clase obrera y reivindicar todas las luchas en la perspectiva de lograr gobiernos de trabajadores que terminen con la explotación capitalista. Así lo haremos, una vez más, este viernes 1° de Mayo, junto al sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda Unidad.

INTERNACIONAL

Venezuela: “Tenemos hambre, queremos comida”

Escribe **Miguel Ángel Hernández** | Dirigente del Partido Socialismo y Libertad, sección venezolana de la UIT-CI

A la terrible situación que ya padecemos las trabajadoras y trabajadores venezolanos, ahora se suman las consecuencias de la pandemia y el confinamiento social que ha impactado severamente en la economía ya destruida del país. Todo esto ha ocasionado un acrecentamiento de las catastróficas condiciones sociales en Venezuela.

En las últimas semanas hemos presenciado cómo los precios de los productos de primera necesidad se han ido hasta las nubes mientras nuestros salarios son cada vez más miserables. Empresarios y comerciantes aprovechan la cuarentena y la crisis sanitaria para incrementar abusivamente los precios de los productos esenciales.

Esto ha agudizado el hambre y la desesperación en miles de pobladores de los barrios populares, especialmente en las zonas más pobres del país, que han salido a saquear comercios en sus localidades al grito de “Tenemos hambre, queremos comida”. Ante eso, el gobierno vuelve al expediente de la represión. Ya hubo un muerto y dos heridos de bala en la población de Upatá, en el estado de Bolívar.

Si bien es importante mencionar que aún son protestas aisladas y no masivas y en zonas poco pobladas, el gobierno de Maduro, temiendo la explosión social, hace esfuerzos por garantizar algo de

comida a través de las cajas Clap y mínimos servicios en las grandes ciudades, especialmente en Caracas.

Todas estas protestas y saqueos son expresión del hambre que sufren millones de habitantes de los sectores populares cansados de la frustración de no poder comprar comida a sus hijos.

El gobierno busca acordar precios con los empresarios y ocupa temporalmente algunas empresas. Esta política ha fracasado en otras ocasiones.

En tal sentido, el Partido Socialismo y Libertad sigue planteando que es necesario imponer con la movilización un plan económico y social de emergencia. El gobierno de Maduro debe orientar todos los recursos económicos a enfrentar la crisis social y sanitaria.

Hemos venido llamando a todos los sectores sindicales, organizaciones populares, juveniles y a la verdadera izquierda revolucionaria a unificarnos para dar la pelea por ese plan que parta de exigir un salario igual a la canasta básica.

No se puede seguir pagando la deuda externa. Debe suspenderse el gasto en armas, así como los ejercicios militares. Hay que confiscar los bienes de los corruptos de Pdvsa y los importadores



fraudulentos, así como cancelar los contratos de empresas mixtas con las transnacionales; asimismo, imponer a los grandes grupos empresariales, banqueros y transnacionales un impuesto especial para atender la crisis social y sanitaria.

Estados Unidos: el “sueño americano” se transformó en pesadilla

Con un millón de contagiados y más de 55.000 muertos, los Estados Unidos se han convertido, lejos, en el país con la mayor cantidad de víctimas del coronavirus. Lo que en otro momento podría esperarse que aconteciera en un ignoto país africano, hoy lo está sufriendo la principal potencia imperialista del planeta. Y, como si esto ya no fuera una verdadera tragedia, imitando prácticas medievales, su presidente, Donald Trump, rodeado de sus principales asesores, anunció que habría que experimentar “inyectarse lavandina y otros desinfectantes para combatir el virus”.

Estas declaraciones desopilantes, que rápidamente tuvieron que ser desmentidas por el campo de la medicina, inclusive por los propios fabricantes de estos productos frente al temor de que la recomendación del presidente negacionista causara una tragedia mayor, son apenas algunos de los problemas que enfrenta el país del Norte. Como ya venimos denunciando, las protestas y huelgas de trabajadores se han multiplicado por la falta de medidas de seguridad, tanto por parte del gobierno como de las propias patronales que se niegan a implementar el aislamiento social.

La pandemia ha dejado al desnudo la verdadera situación de crisis social y política que impera en los Estados Unidos y que deja a 26 millones de desocupados en poco más de un mes de iniciada. El “sueño americano” prometido por Trump se está convirtiendo en una verdadera pesadilla, sobre todo para los sectores populares y de menores recursos. Además del oscurantismo necio del presidente, el pueblo trabajador está enfrentando la falencia del sistema público de salud, donde la falta de insumos básicos para combatir el virus amenaza convertir a la hasta ahora mayor potencia capitalista imperialista en un escenario en ruinas.

Los propios trabajadores de la salud continúan denunciando la falta de recursos, de barbijos, de test para diagnosticar infectados, de cobertores para abrigar los enfermos, etcétera. Como declaró Andrew Artens-tein, director de un centro sanitario de Massachusetts: “Nunca pensé que en mi condición de líder de un sistema de salud que trabaja en un país rico, altamente desarrollado, con lo mejor de la ciencia y la tecnología [...] enfrentaría este tipo de circunstancias [...] Da la impresión de que no viene la caballería en ayuda”. Y, probablemente, el Séptimo de Caballería nunca llegue, porque no se trata de uno de los clásicos westerns yanquis, sino de la cruda realidad de un capitalismo en crisis de la que cada vez le resulta más difícil salir para continuar gobernando el mundo.



Francia, entre el coronavirus y el hambre

La periferia de París ha sido la más golpeada por la pandemia. Las más altas tasas de mortalidad se registran en los barrios más humildes, donde conviven trabajadores, inmigrantes, autónomos o precarizados (que dependen de changas o pequeños servicios) y desocupados. De estos barrios también proceden quienes están en el “frente de batalla” y ponen en riesgo su salud: enfermeras, cajeras de supermercado, transportistas, entre otros.

A todos ellos el virus y el confinamiento forzado les han cambiado la vida para peor. Al temor del contagio ahora se le ha sumado el miedo al hambre. Muchos sin papeles, no tienen acceso al seguro de desempleo y otros no pueden salir a la calle a buscar el sustento diario. Por esa razón, al paisaje tradicional de edificios de bloques de estos barrios se han incorporado las largas colas de vecinos esperando la ayuda organizada en los centros comunitarios.

En un centro municipal de Clichy-sous-Bois, la misma región que desde 2005 es reconocida por los levantamientos de los hijos de inmigrantes, se reparte arroz, aceite, leche, frutas y verduras. “Muchos nos dicen que jamás habrían pensado en venir a buscar paquetes de ayuda. Hay hambre”, denuncia Mohamed Mechmache, miembro del centro AC Le Feu. Y agrega: “Pero son gente digna. Hay dignidad en el barrio”.

Ante esta situación no es extraño que los choques entre jóvenes y policías, que ya acontecían antes de la cuarentena, se incrementen, como en la última semana. En la periferia de París existe un alto índice de familias que viven por debajo de la línea de pobreza, algo inconcebible para un país como Francia. La falta de respuestas por parte del gobierno de Macron a los graves problemas sociales de esos barrios será la generadora de nuevos disturbios, ahora agravados por el coronavirus y el hambre.

Brasil: ¡fuera Bolsonaro!

La política del gobierno de Bolsonaro y de la burguesía de no aplicar una cuarentena organizada ya ha costado miles de vidas. La falta de equipamientos de protección y condiciones sanitarias adecuadas para los trabajadores de servicios esenciales como la salud, el transporte o la limpieza urbana configura un verdadero desastre.

En medio de esta gravísima situación acaba de renunciar el ministro de Justicia Sergio Moro, considerado el más popular del gabinete presidencial, que denunció que Bolsonaro quería interferir directamente en la Policía Federal para manipular los procesos que corren contra sus hijos por denuncias de corrupción y de interferencia, mediante fake news, en el proceso electoral. Además, para evitar que se investigue la estrecha relación del clan familiar con la milicia de Río de Janeiro.

Brasil vive una coyuntura marcada por el avance del coronavirus y el aumento de la crisis política, económica y social. Ya se han contabilizado hasta 474 muertes en un día y en total superan las 5.000 hasta la fecha. Los cadáveres se acumulan en los corredores de los hospitales de ciudades del Gran Río y el cementerio de Manaos no consigue sepultar a todas las víctimas. Más de un millón de trabajadores están sufriendo la suspensión de contratos de trabajo, reducción de salarios y de derechos laborales sin que haya medidas de protección por parte del gobierno. Mientras tanto, los banqueros esperan la votación en el Congreso de un proyecto que propone estatizar las deudas de los bancos privados. Un escándalo.

Los compañeros de la CST (sección brasileña de la UIT-CI) seguirán llamando a la más amplia unidad de acción contra el proyecto autoritario de Bolsonaro y proponiendo que este 1° de Mayo las principales centrales sindicales incorporen los reclamos de ¡Fuera Bolsonaro y Mourao!, por una cuarentena controlada, con salario integral, sin despidos y con equipamientos de protección adecuados. Por el no pago de la deuda e impuestos a las grandes fortunas y multinacionales, canalizando esos recursos para el Servicio Único de Salud, para establecer un salario básico de emergencia para los desempleados y precarizados y para asistir con alimentos a las familias necesitadas.